

20 DE JUNIO, MITIN INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA EN LONDRES



NO A LA GUERRA, NO AL "REARME", NO AL GENOCIDIO. DEFENSA DEL SALARIO, LAS PENSIONES, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LAS LIBERTADES

EDITORIAL

La población trabajadora exige un giro a la izquierda

La decisión de regularizar la situación de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras emigrantes -al margen de los motivos que la hayan desencadenado- es sin duda una muy buena noticia para el conjunto de la clase obrera.

No es una medida que caiga del cielo. Por el contrario, es el resultado de una movilización que dura más de cinco años, de más de 700.000 firmas de una ILP, de la lucha por derogar la nefasta Ley de Extranjería. No nos engañemos: es una medida limitada, porque no es la derogación de la ley, sino su modificación parcial, pero es un respiro de alivio para cientos de miles de hermanos de clase, para la porción más explotada de la clase trabajadora.

No es por casualidad que las derechas clamen al cielo, y lancen una campaña de bulos e insultos, porque la persecución contra los emigrantes es una necesidad política para dividir a la clase obrera, y la sobreexplotación de la mano de obra inmigrante sin derechos permite que quienes la emplean obtengan pingües beneficios.

Pero ese paso adelante está en contradicción con la apuesta del Gobierno por la política de guerra, con el hecho de haber triplicado en 2025 el gasto militar. 34.000 millones según ha confesado el propio Pedro Sánchez. Una política que cuenta con el consenso de las derechas. O política de guerra o necesidades de la población.

Todos los datos están ahí. Los accidentes ferroviarios no son ajenos a la desinversión en mantenimiento, obra de todos los Gobiernos desde 2010, incluido, por tanto, el actual. Como los déficits en todos los servicios públicos, desde la sanidad al cuidado de los embalses. Cada euro en armas es un euro menos en sanidad, educación, infraestructuras, en vivienda. O sea, en la seguridad y las necesidades de la población.

La regularización parcial de trabajadores sin papeles demuestra que es posible otra política, que lo único que falta es voluntad de llevarla a cabo.

Otra política para la mayoría del país, para los trabajadores y los pueblos. A esto están confrontados todos los partidos que dicen defender los intereses de la mayoría social.

**Manifiesto internacional
contra la guerra**

Primeros firmantes página 7

En defensa de la sanidad pública

página 4



Las consecuencias de la "liberalización" del ferrocarril

página 3



Derogación de la Ley de Extranjería

página 9



En defensa de Cuba

página 11



Acerca de la ampliación de la base de Morón

Preparan la guerra...

La ampliación de la base militar de Morón de la Frontera ha pasado desapercibida para la población. Los medios de comunicación no han publicado prácticamente nada al respecto, aunque en diversos medios especializados sí se ha informado del gran despliegue de infraestructuras militares que supone.

La base aérea de Morón tiene una importancia estratégica para la Fuerza Aérea de los EE. UU., que comparte su uso con el Ejército del Aire.

La ampliación consiste en pasar de once a más de veinticinco depósitos de munición, preparándola para gestionar grandes volúmenes de esta de forma continuada, gestionarla y redistribuirla; es decir, pasa a convertirse en un punto logístico estratégico capaz de sostener amplias operaciones, como pudiera ser el atacar militarmente el norte de África u otras regiones, como el Oriente Medio; aunque, indudablemente, los primeros perjudicados son los trabajadores y los pueblos de España. Los nuevos depósitos están diseñados

para almacenar munición de alto riesgo. No se trata de una «modernización» normal, sino de aumentar la capacidad militar para un previsible escenario de conflictos de alta intensidad.



La construcción de estos depósitos implica que los altos mandos del Ejército norteamericano y de la OTAN consideran posible un escenario de guerra y se preparan para ella, aunque esto no implique necesariamente una guerra inminente. Claro, que la concentración de recursos de guerra hoy

condiciona el futuro; de hecho, una decisión así no se toma de forma improvisada, se trata de una planificación a largo plazo y de una gran inversión que se hace con la previsión de ser usada.

Una cuestión alarmante es si una instalación militar de este tipo no puede convertirse en un objetivo militar en el caso de un enfrentamiento bélico, qué repercusiones puede tener eso para la población civil. Más alarmante aún es que el Gobierno acepte esta ampliación que lleva aparejada una pérdida de soberanía, una decisión que puede arrastrarnos a un conflicto bélico sin estar formalmente en guerra. Cada vez se hace más evidente que estar con la guerra implica cerrar las bases norteamericanas y salirse de la OTAN.

... en beneficio del capital financiero

La política de rearme impulsada por Trump se concreta en un futuro de guerra, como se desprende de lo anteriormente dicho, pero ¿en beneficio de quién? El Gobierno determina su política de Defensa en función de las exigencias

del imperialismo estadounidense, que le impone un calendario acelerado de rearme que debería alcanzar, según algunos técnicos, el 5 % del PIB en 2040. Se imponen así las alianzas con la industria militar, con el fin de aumentar el gasto sin tener otras cuestiones en consideración, ya sean las necesidades de vivienda pública, las infraestructuras, etc. Y, financiar a la industria de armamento y adquirir sus productos obliga a diseñar compromisos de pago plurianuales que muy difícilmente pueden revisarse; es decir a orientar el gasto público hacia una economía de guerra.

Airbus anunció recientemente que 2025 había sido un año récord de ventas (un 20% más de pedidos) y destacó el contrato por 4.000 millones con el Ministerio de Defensa para adquirir 100 helicópteros, que entregará entre 2027 y 2031.

Los fondos de inversión en compañías de armamento han duplicado su patrimonio, (hasta los 24.000 millones) por los beneficios acumulados y la entrada de nuevos capitales. Estos beneficios y el desvío desde industrias pro-

ductivas a la especulación en la industria militar vienen alentados por la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto militar al 5% del PIB, por la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina, el ataque militar a Venezuela, la disputa sobre Groenlandia, la tensión en el golfo Pérsico, y las ventajas fiscales que dan los Gobiernos europeos a estos especuladores.

¡Ni un céntimo, ni un hombre para la guerra!
Para concluir, el incremento del gasto militar, el rearme, conduce al deterioro y privatización de todos los servicios públicos, al desvío de los capitales a la especulación en torno a la producción de instrumentos de muerte y destrucción, y más pronto o más tarde, a la guerra militar.

Ver en las páginas 7 y 10 de este periódico el llamamiento contra la guerra y la preparación del mitin que se celebrará el 20 de junio en Londres y las necesidades sociales que podrán satisfacerse con los miles de millones del gasto militar.

Blas Ortega

El reto de la financiación autonómica

La tragedia de los trenes dejó en segundo plano el multiconflicto de la financiación autonómica, que viene de lejos. Muchos gobiernos dejaron a un lado abordar los problemas de la distribución de fondos entre regiones y de las competencias entre las instituciones regionales, locales y estatales. Así las carencias y los conflictos entre los beneficios privados se han agravado.

Hoy hace falta dinero, pero 21.000 millones más no sirven, cuando hay gobiernos autonómicos que reparten esos fondos entre privados que controlan servicios públicos.

Hay gobiernos autonómicos que privatizan y el dinero de los españoles no ha de financiar ese saqueo. El dinero de la sanidad pública no ha de servir para dejar sin servicio a los pacientes y engordar así los beneficios de los consejos de administración de Ribera Salud (hospital de Torrejón).

Los presupuestos de sanidad no han de dilapidarse en la cadena de grandes beneficios de los hospitales de Quirón, empezando por la Fundación Jiménez Díaz. El dinero que Ayuso recibe para sanidad en gran parte va para regalos a sus clientes.

Hace falta democracia

Desde el 2008 al 2021 no ha habido inversión en ferrocarriles y el pueblo descubre esto cuando hay decenas de muertos. Entretanto Arcelor Mittal y otras diez grandes empresas se han forrado con la modernización de instalaciones ferroviarias que ha resultado asesina. Los 21.000 millones, ¿a dónde van?

Hace más de un año el PSOE, con voto de su Ejecutiva, firmó el pacto de financiación del PSC con Esquerra. Partía de reconocer que el sistema tributario autonómico había arruinado a Cataluña y establecía que en lo sucesivo la Agencia Tributaria de Cataluña recaudaría hasta el último céntimo.

Esto se debía extender: el sistema autonómico ha arruinado a todos los

can trozos del pacto de hace un año, ocultando lo fundamental, que era borón y cuenta nueva, que los pueblos se lancen a conocer la verdad y tomen medidas para satisfacer lo más urgente.

Por su parte, Junts propone una gran intervención del pueblo catalán, obviando el punto de partida obligado: romper con la trampa del sistema autonómico que impide que los pueblos



pueblos, hay que democratizar la recaudación. Pero el PSOE guardó el pacto en un cajón. La ministra de Hacienda mantiene el sistema autonómico que impide resolver democráticamente los problemas de todos los pueblos. Se apoya en que el PP quiere estas autonomías inventadas para proteger el poder de los jueces, de los militares y la OTAN, del aparato centralista de la dictadura.

Se inició un debate

El Gobierno se ha puesto de acuerdo con Oriol Junqueras, de ERC: esgrimen el pastel de 21.000 millones, sa-

decidan libremente.

Partiendo de este cuadro, empezaron a llover las opiniones. No puede haber una buena financiación que no sea un acuerdo entre pueblos.

En estas una serie de organismos se ponen de acuerdo en la solución de la financiación y piden que el Congreso vote por ella.

No pueden sentirse representados los trabajadores en esta solución «de todos» porque con ellos no han contado. Hacen falta propuestas de financiación entre pueblos impulsadas por los trabajadores.

M.C

El Borbón rechazado

De nuevo, el rey y su familia han celebrado actos de la Fundación Princesa de Girona fuera de esa ciudad.

Esto es así desde el 3 de octubre de 2017. Dos días antes más de dos millones habían participado en el referéndum independentista. La infame represión policial encontró el rechazo de todo el pueblo catalán, que se manifestó unánime ese día 3. En la manifes-

negaron a aparecer con los reyes en actos públicos. El Ayuntamiento de Girona declaró al rey «persona non grata» y los reyes nunca han encontrado en Girona un local para sus actos.

Hay socialistas que lamentan que Illa haya levantado el veto sin que el rey haya ratificado su discurso de 2017.

Este 3 de febrero los reyes fueron acogidos en Sant Boi por el



tación hubo, por ejemplo, cortejos de CC. OO. y UGT.

Contra todo el pueblo catalán lanzó el rey aquella noche su discurso a todos los españoles: «¡a por ellos!».

Pasó el rey por encima del Gobierno español del PP, que no aprobó que dirigiese ese discurso. A partir de ese día, la mayor parte de los cargos públicos catalanes se

presidentaron catalán en funciones, el ministro Bolaños, y alcaldes socialistas. Entregaron un premio de la Princesa de Gerona. No tuvieron ni una palabra saludando a los samboyanos. Hubo una delegación de empresarios.

El diario Ara titulaba así su crónica: «El rey continúa en Sant Boi su exilio de Gerona».

Andoni Zarra

A los quince meses de la Dana

Quince meses después de la tragedia de la dana en Valencia, sigue sin solución el problema del alcantarillado, cuya renovación se planifica a años vista mientras aparecen socavones en las calles y se teme por la situación de los cimientos de casas y edificios; lo mismo sucede con los colegios, sustituidos por barracones, y previsión de años para reconstruirlos. Sigue habiendo garajes llenos de barro, ascensores que no funcionan...

Una parte de las personas afectadas sufre síndromes de ansiedad, propios de un estrés postraumático, debi-

do a la imposibilidad de rehacer sus vidas tras haberlo perdido todo.

La «reconstrucción» se hace de espaldas a los afectados y siguiendo los mismos patrones que llevaron a las devastadoras consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2025: construcción de un polígono industrial y de un gran centro comercial en zonas inundables, especulación urbanística, etc.

El Gobierno Valenciano, para realizar sus planes y sortear la indignación del pueblo, le muestra una cara amable y de cooperación al Gobierno

de Pedro Sánchez, que le da la mano, y no deja de mentir a todos en el Parlamento y en cualquier lugar, insulsa a las víctimas con su actitud y sus declaraciones y usa la represión política para vengarse de quienes resisten, como en el caso de SOS Parke. La movilización sigue, el pasado 31 de enero en Benetúser, miles de ciudadanos volvieron a manifestarse exigiendo responsabilidades a Mazón y su Consell.

Como dice un comunicado de las asociaciones de víctimas: «Quince meses después, tampoco se han asu-

mientos responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día [el 29-O], así como el acta de Mazón ya continuidad de los consellers Camarero, Rovira y Barrachina».

Las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado».

B.O.



PSOE

PSOEV

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.

El artículo de opinión enviado a la Redacción debe ser enviado por correo electrónico a la dirección de la revista.



Accidentes ferroviarios

Los dos recientes accidentes de trenes, sumados a otros producidos anteriormente, ponen de actualidad la situación del sistema ferroviario, sus infraestructuras y la liberalización (privatización) del servicio.

En espera de que se determinen las causas del accidente de Adamuz (el ministro Puente en sede parlamentaria apunta a la rotura interna de la soldadura del carril) las de Cataluña son claras: el propio ministro de Transporte ha declarado que «la infraestructura es viejísima y con años de abandono».

Liberalización (privatización) del servicio ferroviario

La apertura a la «libre competencia» del transporte ferroviario se produce por imposición de la Unión Europea,

que promulgó entre 2001 y 2006 cuatro directivas comunitarias y una serie de reglamentos, los llamados Paquetes Ferroviarios (2001, 2004, 2007, 2016), que obligaron a la separación de infraestructura y operación, separando en España la gestión de la infraestructura (ADIF) de la operación de los servicios (que hoy operan dentro de la alta velocidad).

El ejemplo británico

La liberalización del transporte ferroviario en la UE se produjo a pesar del lamentable resultado de la privatización del ferrocarril en Gran Bretaña.

La privatización de British Rail, supuso desde el comienzo graves problemas y un deterioro acusado del servicio. Pero el Gobierno británico, tras

haber privatizado los trenes, decidió hacer lo mismo con el Adif británico. Railtrack, el operador privado que se

El recorte de las inversiones en infraestructuras, en general, afecta tanto a las inversiones pendientes como al mantenimiento.

hizo con el control de la infraestructura, colapsó en 2001 tras un lustro de accidentes y pérdidas económicas. El Gobierno tuvo que recuperar el control de vías y estaciones, que han vuelto al control público de la Network Rail.

El deterioro de los servicios, la quiebra de buena parte de las compañías (el transporte se dividió en más de 30 empresas), y la conflictividad laboral motivada por los recortes de plantilla y de derechos laborales obligó a la renacionalización parcial del servicio a partir de 2020. Numerosas compañías han vuelto al operador público.

La situación en España

La liberalización del ferrocarril de mercancías en España, aplicada en 2005, ha sido una experiencia absolutamente negativa. Pese a que la Comisión Europea pretende que el 30% del transporte por carretera a distancias superiores a los 300 km pase al ferrocarril, en España ese porcentaje fue del 1,9% en 2017, según los datos que la CNMC publicó en diciembre de 2018. Según la Plataforma en Defensa del Ferrocarril: «Desde que entró la Ley del Sector Ferroviario en 2005, antes de la privatización, el transporte de

mercancías por tren de todo el Estado ha pasado de ser el 11% al 2,4%».

La renacionalización de las infraestructuras y el transporte ferroviario es una necesidad. Además, la experiencia británica demuestra que la privatización es un mal negocio, en todos los sentidos.

En cualquier caso, la subcontratación creciente en RENFE y ADIF, contratación a la baja de obras y mantenimiento de redes, supone un deterioro de la calidad de las infraestructuras, que tarde o temprano tendrá consecuencias.

Deterioro de las infraestructuras

El accidente ferroviario de Barcelona pone de manifiesto, una vez más, que las infraestructuras en general, incluyendo las ferroviarias, no están preparadas para las contingencias. Las continuas averías en la red de cercanías corresponden al recorte general de las infraestructuras.

El recorte de las inversiones en infraestructuras, en general, afecta tanto a las inversiones pendientes como al mantenimiento.

No se puede negar que el tiempo que está haciendo en España, fuertes vientos y lluvias, en estas últimas semanas es un inconveniente añadido, pero es inconcebible en 2026 que un tren descarrile porque choca contra un muro de contención que había caído sobre la vía, es evidente a todas luces que ese talud no estaba ni mantenido ni reforzado ante la posibilidad de derrumbamiento.

En cuanto al accidente de Adamuz (Córdoba) todo apunta (según declaraciones del ministro) a una rotura interna del carril por soldadura defectuosa.

Los primeros meses después de la

La política de rearme no solo sirve para preparar la guerra, y con ella la muerte y la destrucción, sino que es una amenaza diaria para la seguridad de la población.

inauguración de la línea AVE Madrid-Sevilla, hace 33 años, una máquina recorría en ambos sentidos a partir de las 0h, finalizando a las 5h, todo el recorrido de la línea originando informes del estado de la vía, la catenaria y el estado topográfico del terreno. Hoy es el tren de auscultación geométrica, curiosamente llamado tren Séneca. Eso era en 1992. Hoy, todo apunta a que ya no es así.

Hoy, el incremento de recaudación del Estado permitiría recuperar las inversiones, e incluso poner en marcha un plan de choque en infraestructuras (que, además, crearía cientos de miles de empleos). Bastaría con revertir la prioridad que el Gobierno ha dado al gasto militar, y dedicar esos miles de millones a la inversión en infraestructuras, y a la recuperación de la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos.

La política de rearme no solo sirve para preparar la guerra, y con ella la muerte y la destrucción, sino que es una amenaza diaria para la seguridad de la población.

Pepe Gallego

Entrevistamos a Ana Gómez trabajadora de Rodalies



Manifestación en Barcelona, sábado 7 de Febrero 2026

Información Obrera: Bon día, Ana. Nos conocimos en el encuentro del CATP de Tarragona a finales de año y en la reunión explicaste toda tu actividad y la de tus compañeros y compañeras que formáis, con nombre muy acertado, la plataforma «Dignitat a les vies».

Ahora la situación os ha obligado a redoblar vuestro trabajo en defensa de los usuarios y usuarias de Cercanías. En particular en la última avería que ha colapsado todo el sistema ferroviario.

ANA: No, el colapso de Rodalies no es una avería, no es mala suerte, no es un cúmulo de incidencias técnicas inevitables. No es sino un sabotaje cotidiano en la movilidad de las clases populares. Una violencia estructural normalizada que condena a miles de personas a llegar tarde, cansadas, angustiadas y culpabilizadas al trabajo, en los estudios y en la vida.

Cada tren suprimido, cada retraso de media hora, cada andén lleno sin información no es solo un problema logístico: es tiempo de vida robado. Es salario indirecto que desaparece. Es disciplina impuesta a través del caos. El mensaje que nos dan está claro: adaptarte, espabilate, búscate la vida. Y si no llegas, la responsabilidad es tuya. Pero no todo el mundo tiene las mismas opciones. Este sabotaje golpea de pleno a la clase trabajadora que se desplaza cada día para ir a trabajar.

Personas que dependen del tren para llegar puntuales, que ven cuestionada su profesionalidad por causas que no controlan, que acumulan cansancio, ansiedad y miedo a sanciones o despidos.

Cuando el transporte falla, no solo se pierde tiempo, se pone en riesgo el salario, la estabilidad laboral y la dignidad. El caos no es neutro, funciona como una herramienta de control sobre quien no tiene margen, sobre quien no puede teletrabajar, sobre quien no puede pagar alternativas.

IO: ¿Consideras pues que los más afectados son los usuarios y usuarias trabajadoras?

ANA: No, claro que no solo ellos, también impacta a miles de estudiantes que se mueven cada día para poder estudiar, porque vivir cerca del centro educativo es un privilegio que no se pueden pagar. Estudiar lejos de casa no es una elección libre: es una obligación impuesta por un sistema que encarece la vivienda y abandona el transporte público. Jóvenes que salen de madrugada, que acumulan horas de trayecto, que llegan tarde a clase o no llegan y que son penalizados como si la precariedad fuera una decisión individual y no una imposición material.

Sin transporte público digno, el derecho a la educación también se vacía de contenido. El abandono de los estudios, el cansancio crónico, la angustia permanente no son fracasos personales: son consecuencias directas de un sistema que convierte la movilidad en una barrera de clase.

IO: Está claro, pues, que pone en cuestión al derecho a la educación.

ANA: Y podemos seguir, porque va más allá y esto es lo que cuestionamos

desde la plataforma. Concienciar en el fondo de la cuestión.

Ante el hundimiento deliberado del transporte público, solo una parte de la población puede pagarse alternativas: coche, gasolina, seguro, aparcamiento. El resto, la gente que limpia, los que cuidan, construyen, estudian, producen, toda esta gente queda atrapada en un sistema que obliga a elegir entre llegar tarde o endeudarse, entre la precariedad o el automóvil.

Así pues, el colapso de Cercanías no solo castiga las clases populares, sino que las empuja hacia el transporte privado, convirtiendo una necesidad básica en una mercancía más.

La movilidad no es solo trabajo o estudios. Es ir al médico, hacer trámites, cuidar personas dependientes, mantener vínculos sociales y familiares. Es poder vivir.

Cuando el transporte público falla de manera sistemática, el que se rompe no es solo un horario, sino el acceso mismo a la vida cotidiana. Se aíslan pueblos y barrios, se limita la autonomía de la gente mayor, se contribuye a



Barcelona

vaciar todavía más las zonas rurales. Quien no tiene coche queda condenado a quedarse quieto, a renunciar, a depender. Mientras se habla de sostenibilidad y transición ecológica, las instituciones fuerzan a miles de personas a contaminar más, a gastar más y a vivir peor.

Hipocresía institucional al servicio del capital. Porque este proceso no es inocente, responde a un modelo de transporte pensado para las élites, para la alta velocidad de ejecutivos y turistas. Y no, aquí no contamos los AVANT: estos trenes que circulan por las vías de los ricos como si fueran una cuota solidaria, una especie de «beca» porque cuatro trabajadores se cuecen en la red de alta velocidad y acaban siendo los «pringados» del sistema, sometidos a precios, retrasos y prioridades que no

deciden. Así pues el transporte público deja de ser un derecho y lo convierten en un servicio de segunda, indigno e imprevisible.

Y con él, también se degrada la dignidad de quien depende. Pero lo peor de todo es su naturalización. Se nos pide paciencia, comprensión y resignación. Se nos dice que «se está trabajando» mientras el desastre es permanente.

El caos sistemático es una decisión política. Cuando no se invierte en Cercanías, se está decidiendo quién importa y quiénes no.

Este sabotaje cotidiano tiene una función clara: individualizar un problema colectivo. Hacemos sentir culpables por llegar tarde. Hacernos competir entre nosotros. Romper cualquier idea de derecho compartido.

IO: ¿Es un ataque pues a todos los derechos?

ANA: La realidad es tozuda: sin movilidad pública digna no hay derechos laborales reales, ni derecho a la educación, ni acceso universal a la salud, ni igualdad, ni justicia social.

IO: ¿Habéis convocado una movilización el 7 de febrero?

ANA: Sí, porque esta batalla solo se puede ganar colectivamente: señalando responsables, organizándonos y negándonos a aceptar que vivir mal sea el precio inevitable de trabajar, estudiar o simplemente existir.

Como he dicho antes no se trata de un problema técnico. Es un conflicto político. Y es hora de tratarlo como tal. Por todo esto, hacemos un llamamiento a salir a la calle el día 7, a las 17:00 h, en la ciudad de Barcelona. Sabemos que a mucha gente de Tarragona le costará llegar, pero precisamente por eso debemos estar. La movilidad colapsada no puede servir de excusa para el silencio. La movilización saldrá de la Estación de Francia, centro de ADIF, y avanzará hasta la plaza Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat, donde exigiremos responsabilidades políticas.

Esta situación no puede quedar impune ni puede salir gratis.

Cuando fallan los trenes, falla el país. Y cuando fallan los derechos, toca plantarse y decir basta.

IO: Gracias Ana por la información y por tu trabajo.

Comite de Redacción

Los maquinistas de ferrocarriles anuncian huelga



Tras las muertes de dos maquinistas en sendos accidentes, todos los sindicatos de las compañías de transporte ferroviario, y algunos de los de ADIF, han convocado varios días de huelga para exigir medidas de seguridad, aumento de plantillas, y más inversión en mantenimiento de la red ferroviaria.

Tras la convocatoria, se han celebrado varias reuniones con el ministro de Transportes, Oscar Puente, que se comprometió a solicitar a Hacienda fondos para aumentar el gasto en mantenimiento y contratar más personal, pero sin concretar cifras.

Los sindicatos han valorado la presencia del ministro, y tomado nota de la oferta, pero sus negociadores han confirmado que se mantiene la convocatoria de los tres días de huelga, el lunes, martes y miércoles de la próxima semana. A fecha de cierre de esta edición, la huelga se mantiene.

En Barcelona, miles de personas han salido a la calle el sábado día 7 en protesta por el estado de la red de cercanías, y exigiendo inversiones en la misma.

Las inversiones en la red se desplomaron en 2010, y aunque han venido aumentando desde 2017, si ajustamos el gasto en mantenimiento por kilómetro con la inflación, en 2025 seguía siendo un 10% menor que en 2015, con un tráfico ferroviario mucho mayor; el gasto por kilómetro sigue siendo la mitad de la media europea. Llama la atención la resistencia de Hacienda a liberar fondos para mejorar la seguridad del transporte ferroviario, en contraste con la facilidad con que decenas de miles de millones se adjudican al gasto militar. Lo que pone de manifiesto las prioridades del Gobierno.

Héctor Lagar

Los médicos irán a la huelga contra el exceso de jornada

Los sindicatos médicos han convocado manifestación estatal en Madrid el 14 de febrero, y huelgas intermitentes de una semana contra el Estatuto Marco pactado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE, UGT, CSIF y CCOO. Reclaman «un estatuto propio del médico y el facultativo», y un marco de negociación separado para los médicos, una exigencia que rompería la unidad de la negociación colectiva, y podría abrir paso a la generalización de convenios-franja para cada profesión, y no sólo en la sanidad.

Pero, más allá de esa petición, hay una reivindicación justa del personal médico: acabar con las guardias de 24 horas y las jornadas laborales de hasta 48 horas semanales de promedio, mejorar la retribución de las guardias.

El Estatuto pactado reduce las guardias a 17 horas (24 solo con acuerdo expreso de los afectados), incrementa los tiempos de descanso antes y

después de esas 17 horas, y reduce de 48 a 45 horas la jornada máxima. Pero sigue manteniendo la remuneración de las guardias por debajo del precio de la hora ordinaria (el texto del EM llegó a incluir, durante la negociación, la equiparación, como mínimo, a la hora ordinaria, pero eso fue retirado por exigencia de las autonomías). Y la jornada semanal de 45 horas es una clara discriminación frente al resto del personal, que hace 35 o 37,5 horas.

Al dar la espalda a esa justa reivindicación del personal médico, los sindicatos firmantes refuerzan el argumento de los sindicatos corporativos de que es necesario un ámbito de negociación separado para los médicos.

Estos reclaman la voluntariedad de esa prolongación de jornada y un mejor pago de las horas de guardia. Aunque es difícil que la voluntariedad se aplique, porque la cobertura de urgencias o la atención a enfermos hos-

pitalizados no puede depender de que haya o no voluntarios suficientes en cada centro o servicio, tienen razón en reivindicar un cambio de ese sistema. Un cambio que debe empezar a planificarse de inmediato para que sea posible en un futuro lo más cercano posible.

Reducir la jornada máxima del personal médico y de la enfermería de Atención Primaria a las 35 o 37 horas y media, para cubrir con turnos –como se cubre el resto de plantilla– la atención de urgencias 24 horas y las plantas de hospitalización desde las 15 h. y los fines de semana exigiría la contratación de mucho personal. Habría que aumentar las plantillas, lo que puede exigir, además, planificar un aumento de las plazas en las facultades de Medicina y de las plazas de formación especializada. Hasta que eso fuera posible, hay que mejorar de inmediato la remuneración por las guardias,

al menos hasta igualarla a la hora ordinaria de trabajo.

Aumentar plantilla y subir el precio de las guardias supondría un mayor gasto, nos responden. Sin duda. Pero Gobiernos que debaten gastar 48.000 millones (3% del PIB) u

80.000 millones (5% del PIB) en gasto militar, no pueden excusarse en que el aumento de gasto que supone acabar con las guardias médicas haría insostenible la sanidad pública.

Luis González



El largo declive de la sanidad pública andaluza



La sanidad andaluza se encuentra en un gravísimo estado de crisis. Demoras intolerables de citas en Atención Primaria, listas de espera inmensas para consulta con especialista, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, fuga de profesionales, falta de médicos y enfermeras... Un proceso de deterioro que no se limita a los Gobiernos de Moreno Bonilla, sino que viene de lejos.

Medidas aplicadas por los Gobiernos del PSOE

Si hubiera que datar el comienzo del declive de la sanidad andaluza, habría que citar cuatro fechas: el 28 de mayo de 2010, en que el Gobierno de la Junta aprueba el Decreto-Ley 2/2010, y el 23 de junio de 2010, cuando el Parlamento de Andalucía, aprueba la convalidación de ese decreto.

Gobernaba entonces en la Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, el Partido Socialista, y María Jesús Montero era consejera de Salud.

... y la coalición con Izquierda Unida

Las otras dos fechas corresponden a medidas aprobadas por el Gobierno andaluz el 19 de junio de 2012, por medio del Decreto-Ley de Reequilibrio Financiero, y el 25 de julio, cuando el Parlamento de Andalucía, ante cuyas puertas se concentraban miles de trabajadores de la sanidad, la enseñanza y la administración andaluzas, convalida ese decreto. El decreto aplicaba los recortes exigidos por el Gobierno central de Mariano Rajoy, e incluía recortes en retribuciones para todos los

empleados públicos –por tanto, también contra el personal de la sanidad– y reducía los días de vacaciones y asuntos propios, siendo más duros que los aplicados por la Administración General del Estado. En el caso de la sanidad, se aumentaba la jornada del personal de 35 horas a 37,5, y se reducía la jornada y retribuciones del personal temporal un 25%.

Cuando se aprobaron estos recortes, el PSOE gobernaba en coalición con Izquierda Unida, cuyo dirigente, Diego Valderas, era vicepresidente del Gobierno. Valderas declaró entonces que los recortes debían aplicarse «por imperativo legal».

En aquel momento, un grupo de sindicalistas de CCOO de la Sanidad recogimos miles de firmas pidiendo a los parlamentarios de izquierda que se negaran a convalidar los recortes. Nos entrevistamos con varios parlamentarios de Izquierda Unida (los del PSOE no quisieron recibirnos). Los recordamos que su lema electoral había sido «¡Rebélate!», una consigna que no casa con la aplicación de recortes, por mucho imperativo legal que se invoque. Tres parlamentarios de IU no aprobaron los recortes (dos votaron en contra y uno se ausentó de la sala de sesiones). Pero el paquete de recortes fue aprobado. E Izquierda Unida perdió 7 de sus 12 parlamentarios en las siguientes elecciones.

... con duras consecuencias

Los recortes impuestos en 2010 y 2012 fueron durísimos. El presupuesto sanitario se recortó en un 13,9%, 1.400

millones de euros. Esta reducción del gasto se tradujo en la pérdida de 7.265 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La reducción salarial del 25% para el personal eventual –más de 13.000 empleados del SAS– llevó a muchos médicos a buscar trabajo en la sanidad privada. Sumado a los demás recortes, suponía una pérdida de casi un 40% del salario de los médicos con contrato eventual. Ahí comenzó la fuga de profesionales del SAS, que no se ha detenido desde entonces.

También hubo enormes recortes en inversiones en infraestructuras sanitarias, que cayeron un 78,5% entre 2008 y 2015, un porcentaje que sitúa a la comunidad a la cabeza del país. El gasto sanitario por habitante, pasó en Andalucía en el año 2012 de 1.174 euros por habitante, por encima de Cataluña (1.128) y Madrid (1.104), a menos de 1.000 euros en 2013 (999,18).

Las Mareas Blancas estiman que, entre 2010 y 2020, la sanidad pública andaluza dejó de recibir entre 20.000 y 25.000 millones de presupuesto (en valor actualizado a 2020), y reclaman un plan de choque presupuestario para recuperar esos recortes.

La privatización ya estaba en marcha

Bajo los Gobiernos del Partido Socialista y sus aliados ya existían diversos fenómenos de privatización. Por supuesto, los conciertos para operaciones quirúrgicas, TAC, etc. Pero también había fenómenos de privatización abierta, por medio de la entrega a la empresa Pascual de la asistencia sanitaria en buena parte de la provincia de Cádiz, y algún hospital de Huelva, en régimen de «concierto singular». Con esos hospitales, Pascual tiene encomendada la cobertura de atención especializada a 400.000 andaluces.

A eso se añade el Hospital del Aljarafe, que atiende a esa comarca sevillana de 350.000 habitantes, y es propiedad de la Orden de San Juan de Dios. Hospital infradotado e infranunciado, donde no existen servicios fundamentales (Obstetricia, Neurología, Oncología, Salud Mental, Pediatría, Rehabilitación, Oncología) y que tiene la mitad de médicos, consultas y quirófanos que un hospital del SAS que atiende a una población si-

milar. Casi un 9% de la población andaluza es atendido por hospitales privados.

Moreno Bonilla profundiza el desmantelamiento

Los Gobiernos de Moreno Bonilla han profundizado seriamente ese deterioro. El discreto incremento del gasto sanitario está muy lejos de poder recuperar las consecuencias de los enormes recortes anteriores. Y, de diversas maneras, conciertos, planes de choque, contratos menores, etc., cada vez más dinero del que necesita desesperadamente la sanidad pública va a las arcas privadas.

La política de Moreno Bonilla ha profundizado el desmantelamiento y la privatización de la sanidad. Su primera medida fue eliminar la dedicación exclusiva de los médicos, lo que ha favorecido el paso de muchos de ellos a la sanidad privada. A finales de 2025, se estimaba que la sanidad privada en Andalucía captaba ya al 40% de los médicos de la pública, cuando en 2019 no llegaban al 16,5% de la plantilla total.

Hizo un intento de abrir la atención primaria a la privatización, que fue ce-

que acumula ya un montante de 4.600 millones de euros. Hay más de dos millones de andaluces «atrapados» en las listas sanitarias, un millón esperando una operación o especialista y otro millón aguardando una prueba diagnóstica (esta cifra es aproximada, porque el Gobierno andaluz no publica datos de lista de espera de pruebas).

La sanidad privada tiene para el próximo año más recursos que nunca, un total de 705 millones de euros. Frente a ello, las inversiones sanitarias públicas se reducen en 244 millones de euros respecto al presupuesto de 2025.

A ello se suma los millones de andaluces que, hartos de las demoras, han suscrito una póliza sanitaria privada, que han superado el 160% de aumento en la contratación de seguros entre 2018 y 2024.

La clave está en la organización y la movilización

15 años de recortes, bajo distintos Gobiernos, deben permitirnos sacar una consecuencia: solo la movilización y organización independiente de la población andaluza, que arrastre a las principales organizaciones de la clase trabajadora, puede arrancar a los



rrado ante las protestas populares.

El gasto farmacéutico ha crecido desmesuradamente en beneficio de las multinacionales del ramo. En 2019 era de 1.900 millones y en 2025 se estima en 4.200 millones, un 27,5% del gasto sanitario total. Además, los Gobiernos de Moreno Bonilla han llevado a cabo un desvío de fondos del sector privado

Gobiernos las inversiones necesarias, el plan de choque que demandan las Mareas Blancas, y que permita recuperar las inversiones, abrir consultas y quirófanos por las tardes, recuperar los profesionales que han abandonado la sanidad andaluza por los bajos salarios y malas condiciones laborales.

L.G

Moreno Bonilla ha organizado la fuga de médicos del SAS a la sanidad privada

La política de Moreno Bonilla no es la única causa de la fuga de médicos del SAS. Los recortes aplicados por el Gobierno del PSOE en 2010, y el Gobierno del PSOE e Izquierda Unida en 2012 –con Mª Jesús Montero como consejera de Salud– han supuesto una pérdida de poder adquisitivo de los facultativos del SAS de más del 15%. A eso hay que sumar la política de

contratos precarios que han mantenido todos los Gobiernos.

Pero es cierto que durante los Gobiernos de Moreno Bonilla no se ha corregido ninguno de esos recortes, y se han introducido medidas que facilitan esa fuga.

En 2019, se calculaba que 2.466 médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) compatibilizaban su labor en la

sanidad pública con el ejercicio en el sector privado. Esta cifra representaba cerca del 16,5% de la plantilla total de facultativos de ese año que habían renunciado al complemento de exclusividad para poder ejercer en clínicas o consultas privadas.

En 2029, una de las primeras medidas del Gobierno de Moreno Bonilla en la sanidad fue crear un nuevo comple-

mento que eliminaba la diferencia salarial con los médicos que cobraban la dedicación exclusiva.

Una medida que tiene un coste de unos 40 millones de euros anuales. Se justificó esta medida diciendo que iba a facilitar que médicos de la sanidad privada se unieran al SAS. Pero el efecto ha sido el contrario, como avisábamos los sindicatos de clase.

En 2025, según fuentes de la Consejería de Sanidad, un 40% de los médicos del SAS, también trabajan para un hospital o clínica privada, unos 10.700.

El número se ha multiplicado por 4 en poco más de cinco años.

Corresponsal

Huelga de docentes y personal auxiliar en Cataluña exigiendo mejoras salariales y más contrataciones de personal

Para el próximo 11 de febrero se ha convocado una huelga de docentes y personal auxiliar de todos los centros docentes tanto públicos como concertados, es decir, de todos aquellos financiados, total o parcialmente

educación especial, han sido convocadas por CCOO.

Aunque existen reivindicaciones particulares de cada uno de los sectores, existen reivindicaciones comunes tanto salariales, como la exi-

los centros dependientes financieramente de la administración pública en Cataluña. El que tanto la escuela pública como la concertada hayan sido convocadas a una misma jornada de huelga pone de manifiesto la alarmante falta de recursos que recibe la red educativa de Cataluña. Recordemos que, en esta comunidad, la red concertada tiene una gran presencia y el porcentaje de alumnado, en los centros privados, financiados con dinero público, es aproximadamente del 30%.

La elevada presencia de escuela concertada, que recibe menor financiación por centro que una escuela pública, y los bajos salarios de los trabajadores del sistema público, tanto docentes como personal de apoyo, han permitido que el sistema educativo catalán haya podido funcionar, según el instituto de estadística de Cataluña, con una financiación inferior al 4% del PIB catalán en la mayoría de los años del presente siglo. Los bajos salarios se evidencian en el hecho de que, según el diario Punt Avui, los docentes en Cataluña han perdido un 21% de poder adquisitivo desde 2010 y son los terceros peor pagados del Estado.

Las exigencias sindicales son claras, la administración catalana debe incrementar la partida financiera dedicada a educación pues la misma se encuentra muy lejos del 6% del PIB que contempla la Ley de Educación de Cataluña, LEC y que obligaría a la administración a, prácticamente, doblar el presupuesto dedicado al servicio educativo de Cataluña. Este incremento de recursos debe ir destinado, en su totalidad, a las mejoras salariales, a la contratación de personal de apoyo, a la disminución de los ratios de alumnos y a la creación de aulas de acogida que permitan integrar al alumnado emigrante en el sistema educativo catalán.

*José Francisco Domínguez
Docente y sindicalista de CCOO*

te, por el Departamento de Educación Catalán.

Los docentes de pública han sido convocados por USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT y UGT, los laborales de las escuelas públicas por CCOO, UGT, USTEC, JUNTS, y CGT y las escuelas concertadas, tanto las ordinarias como las de

gencia de más contrataciones de personal de apoyo en los centros educativos que permita la aplicación del decreto de escuela inclusiva y una disminución de los ratios de alumnos.

Estamos ante una huelga que podemos considerar extendida a la totalidad de los trabajadores/as de

Escudo social

Nuestros derechos no son monedas de cambio

Si el Gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda no legisla a favor de las reivindicaciones de los trabajadores,

España ya ha recibido varios requerimientos y condenas por parte del Comité de Derechos Económicos,



abrirá aun más el paso a la derecha y a la ultraderecha. Su renuncia a legislar a favor de los trabajadores y de los pueblos lo que abre es el camino a la barbarie.

Siempre ha sido así. Si no se satisfacen las reivindicaciones, no se puede pretender culpabilizar a los trabajadores que no les votan, ni a los jóvenes que no atisban su futuro. No se trata de adoectrinar hacia la izquierda, ni basta con recordar el pasado y presente franquista. El núcleo está en el pacto de la transición y en unos Gobiernos que han sido votados por los trabajadores pero que apenas han legislado para ellos, eso es lo que ocasiona el crecimiento de la desafección y del avance de políticas y organizaciones ajenas a ellos. No el consumo de redes sociales.

No se puede decir ni prometer lo que no se piensa hacer, y aparentar girar tan solo presionados por las movilizaciones.

Un debate falso

El debate que abre el PP, Vox y en particular Junts (cuyo dirigente aún está a la espera de la amnistía) es totalmente falso. Si por ellos fuera, ni subían las pensiones, ni cruzaría ningún migrante las fronteras, se protegería la propiedad privada desahuciando a las familias, cortarían luz y agua... Siempre lo han hecho y siempre tratarán de hacerlo. Lo único que les impide mostrar claramente su voluntad es la opinión pública, conscientes de que hasta en su partido podrían perder votos si actuaran con tanta energía en defensa de sus intereses.

A su derecha (por decir algo) se encuentran también a sus desafectos.

El 27 de enero se rechazó el paquete de medidas

Una vez que fue rechazada la propuesta en forma de «paquete» de medidas el pasado 27 de enero, el Gobierno se ve obligado a legislar a través de los decretos en los que deben rebajar sus pretensiones fruto de las negociaciones con otros partidos, y eso hizo el pasado martes al aprobar el decreto del «escudo social».

En materia de vivienda

Un nuevo escudo social prorrogó la suspensión de desahucios hasta 2026 con matices.

Esta norma mantiene la protección frente a lanzamientos para hogares vulnerables, prorrogando el anterior, eso sí en viviendas de grandes tenedores. Tras su negociación con el PNV, la medida no afectará a propietarios de una o dos viviendas, estén viviendo en ellas o no, las denominadas familias vulnerables. Todo ello a pesar de tener ratificados España acuerdos internacionales que contemplan la obligación de los Estados de garantizar una vivienda adecuada a la población.

Sociales y Culturales de Naciones Unidas, por seguir desahuciando sin alternativas habitacionales.

En cuanto al bono social

En cuanto al bono social y garantía de suministros, el bono social se prorrogó hasta el 2026.

En empleo

Se mantiene la prohibición de despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar aumento de los costes energéticos como causa objetiva (¿otras sí?), o aquellas empresas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas derivadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

En materia fiscal

El decreto introduce múltiples ajustes como los incentivos a vehículos eléctricos y puntos de recarga, deducciones por obras de eficiencia energética en viviendas y los cambios en módulos del IRPF e IVA para autónomos del sector agrícola, ganadero y pesquero, así como la exención en el IRPF por indemnizaciones de incendios forestales.

En cuanto a las ayudas con relación a la dana e incendios

El decreto extiende las ayudas directas por la dana y declara exentas en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana tras este fenómeno meteorológico.

Así como la exención en el IRPF para las ayudas por los incendios y se prorrogó la suspensión de la causa de disolución por pérdidas vinculadas a acontecimientos naturales y no se computarán las pérdidas registradas en 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicia en 2026.

En cuanto a la financiación autonómica

En materia de financiación, se actualizan las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, se regula el régimen de endeudamiento autonómico y se establece la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos derivados de cuotas nacionales de telefonía móvil. Un decreto que amenazado por los votos de Junts una vez que Podemos ya ha declarado su intención de votar afirmativamente, si deja algo atado, es el derecho a la propiedad, o sea que el derecho a la vivienda, que, aunque reconocida por la Constitución no se le concede el carácter de derecho fundamental sigue sin resolverse.

Y sin vivienda, sin vivienda digna no puede haber democracia. Y visto lo visto solo la movilización puede imponer el derecho a vivir bajo un techo y con dignidad.

Pere Centelles

Publicamos extractos del comunicado de "El Observatorio del Laicismo".

El Observatorio del Laicismo registra en España al menos 693,3 millones de euros en subvenciones a entidades religiosas en 2024, lo que supone 71 millones más que el año anterior (11,4%). Estas son las subvenciones que se han podido contabilizar con total certeza, de modo que la cifra real puede ser mucho mayor.

...muchos ayuntamientos no publican sus datos o bien lo hacen con mucho retraso. También se ha identificado una tendencia creciente a utilizar fundaciones u otras figuras que dificultan identificar que se trata de entidades religiosas.

En España, la financiación de las confesiones religiosas se realiza a través de todas las vías posibles. Desde cesiones de bienes, conciertos educativos y sanitarios, exenciones tributarias o asignaciones del IRPF, hasta subvenciones a todo tipo de entidades para los fines más diversos. Desde el Observatorio del Laicismo,

se viene realizando un trabajo de seguimiento para recopilar todas las subvenciones que se conceden a entidades religiosas o pertenecientes a una confesión religiosa.

Trabajar con la BDNS es complicado, ya que expone la información durante un tiempo limitado, a lo que se añade que muchas administraciones tardan meses en cargar su información. ...

A estas dificultades, se añade otra adicional y es que las confesiones religiosas cada vez recurren más a figuras como asociaciones o fundaciones, cuyos nombres no las identifican como tales entidades religiosas.

En algunas ocasiones, el Observatorio ha sido capaz de identificar estas nuevas entidades como religiosas haciendo un trabajo de investigación; en otras ocasiones hemos identificado subvenciones durante nuestro seguimiento de la prensa, pero estimamos que estas circunstancias provocan que se nos escape la

mayoría de las subvenciones. ...

El Observatorio del Laicismo, proyecto sostenido por la Asociación Europa Laica, cuenta con la colaboración de diferentes miembros de la asociación que recopilan estos datos y están trabajando en el desarrollo de una aplicación que mejore la exhaustividad de la recogida de datos, salvando las dificultades que presenta el visor web de la BDNS.

...Especialmente complejo en el caso de la Iglesia católica (se estima que cuenta con más de 4000 personas jurídicas en el Estado español) ...

Hemos llevado a cabo una serie de actuaciones ante el Ministerio de Hacienda (responsable de la BDNS), el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos contactado con entidades como Fundación Civio y Transparencia Internacional, y estamos avanzando en nuevas acciones para denunciar esta situación y promover una solución.

Corresponsal

Reunión de trabajo en París (8 de enero) para organizar en Londres el encuentro Internacional contra la Guerra Conferencia el 19 y mitin el 20 de junio de 2026



Por Jordi Salvador i Duch

de Potere al Popolo (Italia). Se recibieron mensajes de apoyo de varias delegaciones, especialmente de la DSA de EEUU.

El debate arrancó con un diagnóstico compartido: escalada del belicismo, presión para disparar el gasto militar (incluida la exigencia del 5% del PIB en la OTAN) y un clima que normaliza la guerra como horizonte. Se denunció que esta ofensiva —asociada a la llamada “Norma Trump”— combina amenazas e intervencionismo y empuja a gobiernos europeos a aceptar un rearme acelerado; su efecto no es “más seguridad”, sino un mundo más violento e imprevisible.

Se insistió en que no hay “guerra fuera” y “paz dentro”: la economía de guerra es guerra social. La reunión situó como ejes políticos la denuncia del genocidio en Palestina y la prolongación del conflicto ruso-ucraniano, y el rechazo a que se desvíen recursos públicos hacia la industria armamentística a costa de derechos y bienestar. Se reafirmó una línea política nítida: no al rearme y no al reclutamiento; sí a salarios, empleo digno y servicios públicos.

La convocatoria lo traduce en consignas directas: “Bajad las armas y subid los salarios”, “Bienestar social, no guerra” y “Empleo, no reclutamiento obligatorio”.

Se trató con preocupación la militarización de la vida cotidiana: retorno del servicio militar obligatorio (o su reintroducción por vías eufemísticas), propaganda y presencia militar en centros edu-

cativos, y una logística civil cada vez más subordinada a fines militares (“Schengen militar”), con impactos sobre derechos laborales y convenios, especialmente en transporte.

En el caso francés se señaló el salto en presupuestos de defensa, el impulso a producir armamento “más rápido y en masa” y el refuerzo del reclutamiento juvenil como pieza de esa normalización. En el balance por países, en el Estado español se criticó la falta de debate democrático, la opacidad y contradicciones en el comercio de armas; en Alemania, el alineamiento político con el rearme y un silencio sindical que conviene romper; en Bélgica, una resistencia sindical sostenida contra austeridad y militarización; y en el Reino Unido, la necesidad de ensanchar el frente antimilitarista más allá de un solo conflicto y sumar nuevas voces sociales y políticas.

Finalmente, se concretó la hoja de ruta para Londres: conferencia principal el sábado 20 de junio de 2026 en el Central Hall Westminster (aforo aproximado 2.800 personas, con apoyo exterior mediante pantalla) y una reunión previa el viernes 19 para unos 250 activistas y delegados internacionales. Se acordó reforzar la implicación sindical para que sea un encuentro del movimiento obrero (no solo de organizaciones políticas), trabajar una gráfica común y bilingüe y preparar acciones coordinadas en cada país como antesala del 20 de junio.

Tras el mitin-conferencia internacional de París (4-5 de octubre) se constituyó una Comisión de Organización para preparar el Encuentro Internacional contra la Guerra de Londres (20 de junio de 2026). En ese marco, el 8 de enero se celebró en París una reunión de trabajo con participantes de seis países, orientada a afinar un diagnóstico político común y a concretar tareas organizativas.

Participaron delegaciones con perfiles complementarios (político-parlamentarios y sindicales): desde Alemania, Ulrike Eiffert (dirección de Die Linke) y Andrej Hunko (eurodiputado por BSW); desde Francia, Jérôme Legrave (diputado de LFI) y los sindicalistas Stephan Jouteux, Kevin Crepin (CGT) y Clément Poulet (FO); desde el Estado español, Ester Miranda y Pablo Quesada (Podemos); Jordi Salvador (diputado del Grup Esquerra Republicana) y Pablo García (CCOO); desde Gran Bretaña, John Rees (Stop the War) y Alex Gordon (ex secretario general de la RMT). También participaron camaradas del PIB de Bélgica y

En Sevilla Debate ante las elecciones

Somos muchos los que sentimos preocupación ante los próximos procesos electorales, y la posibilidad de que den paso a Gobiernos de la derecha y la ultraderecha, que arrasen los derechos sociales y democráticos.

Al mismo tiempo, compartimos la preocupación ante la política de un Gobierno que ha incumplido promesas importantes (como la derogación de la Ley Mordaza, las reformas laborales de Zapatero y Rajoy y la Ley 15/97), y que no ha dado solución a problemas

fundamentales de la población trabajadora, como el acceso a la vivienda.

Por ello, os invitamos a una reunión para debatir sobre la situación ante los próximos procesos electorales, la necesidad de la unidad para vencer a la derecha y la ultraderecha, y sobre qué programa debería esta sustentarse.

Os esperamos el próximo día 12 de febrero, a las 18.30h., en la sala 27-A de la sede de CC. OO. de Sevilla. Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58

Corresponsal

En Barcelona Preparando el mitin de Londres

El Catp organiza el próximo día 12 de febrero a las 18h30, en el “Espai Línea”, calle Girona 52 de Barcelona, un encuentro abierto para informar y empezar a organizar la campaña inter-

nacional contra la guerra que culminará en esta segunda etapa en un mitin central en Londres. Como viene informando *Información Obrera*.

Corresponsal



31 de enero, jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino

Madrid de nuevo en la calle por Palestina

Para el 1 de febrero se había preparado en Madrid una manifestación unitaria, masiva, contra el genocidio, por la unidad y la soberanía de Palestina. Una de las grandes.

La persistente lluvia desarboló el barco. Nos manifestamos, faltaría más, con una pancarta de cabeza sin siglas organizativas. Luego seguían los cortejos de diversos colectivos, organizaciones, plataformas, pueblos.

Al fin, en el centro de la Puerta del Sol un amplio corro escuchó el alegato de los organizadores en una voz juvenil. Cuáles son las tareas para luchar contra el genocidio en centros de trabajo y estudio, en las poblaciones.

Y en primer lugar la lucha de todos para exigir al Gobierno la ruptura de toda colaboración con Netanyahu, con las instituciones sionistas y sus padrinos de Washington, en defensa del pueblo palestino.

Esto es más necesario ante la campaña mundial de Trump que confunde el sionismo con los derechos del pueblo judío.

Corresponsal



Ugetistas por Palestina se presenta en Sabadell

En continuidad con la campaña de extensión y presentación del comité de Ugetistas por Palestina, el pasado día 2 de febrero se realizó el acto de presentación en Sabadell, Vallés Occidental. El acto contó con la presencia de representantes de la comunidad palestina en Catalunya y de la asociación Juntos Palestinos y Judíos.

Corresponsal

En Bilbao Preparan delegación a Londres

20 de junio, en el Westminster Central Hall de Londres Mitin Internacional contra la guerra

Llamamiento Internacional

El peligro es inminente.

Conocemos el rostro de la guerra tras el genocidio en Palestina, seguido en directo por millones de personas.

Este genocidio continúa debido a la complicidad de los gobiernos occidentales, que se niegan a actuar para ponerle fin.

Esos mismos gobiernos han trabajado activamente en contra de la paz en Ucrania, una guerra que ha causado 1,5 millones de muertos y heridos entre ucranianos y rusos.

No dejan de aumentar el gasto militar de la OTAN y están empezando a reclutar a los más jóvenes para precipitarlos al desastre.

Las palabras se han convertido en preparativos activos para la guerra en toda Europa.

Los trabajadores ven cómo el dinero que debería destinarse a reparar el deficiente sistema sanitario, las infraestructuras de transporte, las escuelas y las viviendas desaparece en los bolsillos sin fondo de los fabricantes de armas, cuyos beneficios aumentan más rápido que nunca.

Familias que no han conocido el servicio militar obligatorio desde hace generaciones escuchan ahora con angustia a los jefes militares y a los políticos advertir que sus hijos e hijas deben estar preparados para luchar y morir.

La falsa promesa de puestos de trabajo en la industria armamentística es una trampa para la clase trabajadora.

Estas armas crean los empleos más improductivos, pero los más eficaces para acabar con vidas. Desgarrarán los cuerpos de nuestros jóvenes en los campos de batalla, cuyos horrores superarán los peores jamás vistos.

Como escribió Anatole France durante la Primera Guerra Mundial: «Creéis que morir por vuestro país, morir por los industriales».

El peligro es inminente y debemos dar la voz de alarma. Es deber de todos los ciudadanos, y en particular del movimiento obrero, defender la paz, la libertad de expresión y de manifestación, así como los empleos útiles para la sociedad y el planeta. Nuestra misión es decirles a los nuevos señores de la guerra: no financiarémos ni aceptaremos el rearme que pone en peligro nuestro mun-

do. Decimos: «¡Deponed las armas, aumentad los salarios! ¡Bienestar, no guerra! ¡Empleos, no reclutamiento!».

En el mitin contra la guerra celebrado en París en octubre de 2025, que reunió a miles de ciudadanos, sindicalistas, militantes políticos y pacifistas, comenzamos a dar la voz de alarma y a organizarnos por la paz. Fortalecidos por este éxito y por la resistencia de los pueblos que ya han rechazado la guerra y las divisiones racistas que esta genera, nos reuniremos de nuevo en un mitin internacional en Londres, el 20 de junio de 2026.

Invitamos a todos los jóvenes y trabajadores, a todos los sindicalistas y militantes pacifistas a participar en él.

No aceptaremos el descenso a los infiernos del caos y la guerra, único logro de la presidencia de Trump.

Rechazamos el belicismo de los dirigentes europeos que han apoyado la agresión militar contra Venezuela. Afirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y los pueblos de todos los países amenazados por Trump y sus aliados. Exigimos la liberación del presidente de Venezuela y de su esposa, secuestrados por el Gobierno estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump, artífice de esta nueva escalada bélica, cuenta con redes internacionales belicistas de extrema derecha y chovinistas. Es cortado por los jefes de Estado de Europa, y no solo de Europa.

Debemos crear nuestra propia red internacional que trabaje por la paz, se oponga al revitalizado proyecto imperialista estadounidense y luche por los medios de subsistencia, y por la propia vida, de los trabajadores.

Queremos la paz.

Decimos no al rearme, no al servicio militar obligatorio, sí a los servicios de salud, educación y servicios públicos con todos los medios necesarios, a empleos útiles y a salarios más altos.

Unios a nosotros en Londres el 20 de junio de 2026, a las 12 del mediodía, en el Westminster Central Hall.

Han llegado ya cientos de firmas de 22 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Palestina, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

Entre los primeros firmantes

PARLAMENTARIOS:

Amiot Ségolène (Francia, LFI); Belarra Ione (España, Podemos); Castel Laura (España, Grupo Republicano); Cathala Gabrielle (Francia, LFI); Cernon Beranger (Francia, LFI); Chikirou Sophia (Francia, LFI); Corbyn Jeremy (Gran Bretaña); Couloume Jean-François (Francia, LFI); De Masi Fabio (Alemania, BSW); Delgado Varas Lorena (Suecia, La Izquierda del Futuro); Demirel Özlem Alev (Alemania, Die Linke); von der Schulenburg Michael (Alemania, BSW); Edis Mirze (Alemania, Die Linke); Gohlke Nicole (Alemania, Die Linke); Ince Cem (Alemania, Die Linke); Leboucher Elise (Francia, LFI); Legavre Jérôme (Francia, LFI); Martín Elisa (Francia, LFI); Mesmeur Marie (Francia, LFI); Montero Irene (España, Podemos); Noshé Sandrine (Francia, LFI); Obono Danièle (Francia, LFI); Portes Thomas (Francia, LFI); Riazat Daniel (Suecia, La Izquierda del Futuro); Salvador Duch Jordi (España, Grupo Republicano); Sánchez Javier (España, Podemos); Santana Noemi (España, Podemos); Serra Isa (España, Podemos); Stange Julia C. (Alemania, Die Linke); Sultana Zah (Gran Bretaña); Taché Aurélien (Francia, LFI); Thévoz Sylvain (Suiza, Partido Socialista Ginebrino); Trickett Jon (Gran Bretaña, Partido Laborista); Valent Aaron (Alemania, Die Linke); Velarde Martina (España, Podemos).

SINDICALISTAS:

As Yusuf (Alemania, Ver.di, presidente del Comité Federal de Migraciones); Audoux William (Francia, Renault); Ba Awa (Francia, enseñanza); Boiston Xavier (Francia, Bourges); Bourges Anthony (Francia, Thales); Brandau Britta (Alemania, Ver.di); Capron Aude (Francia, enseñanza); Cla-mens Fabienne (Francia, Seguridad Social); Crépin Kevin (Francia); Dalakoyorgos Antonis (Grecia, presidente de la Unión Panhelénica de Marineros de la Marina Mercante); Delrue Benjamin (Francia, sanidad); Diverres Loïc (Francia, arsenal de Toulon); Dutine Armin (Alemania, Ver.di); Eifler Ulrike (Alemania, IG Metall); Ester Espigares (España, Secretaria comarcal de UGT del Vallés occidental) García Cano Pablo (España, John Deere Ibérica); García Cupertino Mari Pau (secretaria general de UGT Servicios Públicos Valencia Sur); Gil Yolanda (España, secretaria internacional de la Federación de Salud CCOO); Gordon Alex (Gran Bretaña, expresidente de RMT); Hamam Nabil (Francia, sanidad); Heathcote Fran (Gran Bretaña, secretario general de PCS); Heckl Norbert (Alemania, Ver.di Stuttgart); Henriques Rafael (Portugal, dirigente del sindicato de médicos - región centro); Hodson Ian (Gran Bretaña, presidente de BFAWU); Jouteux Stéphane (Francia); Krämer Ralf (Alemania, Ver.di); Krupp Gothard (Alemania, Ver.di); Le Roc'h Michel (Francia); Lépoux Benoit (Francia, Thales); Livartowski François (Francia, servicios públicos); Loyau Siegfried (Francia, Seguridad Social); Magnus Axel (Austria); Nivoi José (Italia, portavoz del Colectivo de Estibadores y Portuarios de Génova y sindicalista de la Unión Sindical de Base Mar y Puertos); Pattin Franck (Francia); Pavlovi Zoran (Serbia, expresidente del sindicato de Correos); Penin Philippe (Francia, metalurgia); Petit Astrid (Francia, sanidad); Popescu Mugurel (Rumanía, presidente de la federación sindical Hermes); Porte Tirapo Jorge (España, secretario general de la UGT Tarragona); Poulet Clément (Francia, enseñanza); Rieken Jörn (Alemania, IG BAU Berlín); Rouvier Sylvain (Francia, Exail); Thyrté Joséphine (Alemania, Ver.di); von Hagen Jan (Alemania, Ver.di); Verzeletti Céline (Francia); Virly Brice (Francia, Instituto Geográfico Nacional); Wanceulen Marie José (España, miembro del consejo confederal de CCOO); Zwickel Klaus (Alemania, expresidente de IG Metall y expresidente de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos).

ARTISTAS:

Abdalla Khalid (Gran Bretaña, actor); Ayala David (Francia, actor nominado a los César); de la Cruz Herrera Enriqueta (España, escritora y periodista); Ernaux Annie (Francia, premio Nobel de Literatura); Keramidiotis Yorgos (Grecia, cineasta y documentalista); Kunzi Daniel (Suiza, cineasta).

Y TAMBIÉN:

AbdelFattah Awad (Palestina, Campaña por un Único Estado Democrático); Teresa Aranguren Amezola (España, Periodista especializada en información Internacional del mundo árabe y zonas en conflicto); Baroud Ramzy (Estados Unidos, redactor jefe de Palestine Chronicle); Belkodia Yessa (Francia, cofundadora del Colectivo de Defensa de los Jóvenes de Mantois); Bellou Abdel (Francia, profesor de medicina de urgencias, presidente de Global Network on Emergency); Benjamin Medea (Estados Unidos, Codepink); Braun Reiner (Alemania, Oficina Internacional por la Paz); Cardona Beatriz (España, portavoz de Intersindical Valenciana); Collo Marta y Granato Giuliano (Italia, portavoces de Potere al Popolo!); Ramón Franquesa Artes, Damián Rodríguez García, Francisca López Fernández, María Teresa Blázquez, Encarnación González Triguero y Juan Miguel Fernández (España, portavoces estatales de COESPE); Daly Clare (Irlanda, expdiplomata europea); Däubler Wolfgang (Alemania, profesor de derecho Laboral); de Brabander Ludo (Bélgica, Vrede); Jose Manuel de Pablo (España, concejal de Santurtzi, Bizkaia, Elkarrerkin Santurtzi Podemos / Ezker Anitza-IU / EQUO Berdeak); Eyschen Christian (Francia, portavoz de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento); Frydas Litsa (Grecia, Comité Internacional de Liberación Comunista); Marisa Gadea (España, concejal de Alternativa vecinal de Sopela); Garcés Vicent (España, Izquierda Socialista, ex europarlamentario PSOE); González Luis, (España, ex miembro del Consejo Confederal de CCOO); González Mariscal Ana Isabel (España, primera teniente de alcalde de Getafe); Guillaume Martine (Francia, abogado); Martínez Silvia, (España, secretaria general de UPTA-(UGT) Euskadi); Mireia Mendoza Nolla (España, regidora por ERC en Sant Boi); Mora Elsa, (España, concejala IU Yepes); Hunko Andrej (Alemania, expdiputado del Bundestag, presidente de la BSW de Renania del Norte-Westfalia); Noy Orly (Palestina, periodista); Pagani Rémy (Suiza, exalcalde de Ginebra); Pappé Ilan (Gran Bretaña, historiador); Peovi Katarina (Croacia, copresidenta del Frente de los Trabajadores, expdiplomata); Rees John (Gran Bretaña, Stop the War) Carlos Sánchez, (España, Profesor de universidad y miembro de la dirección de Izquierda Unida); Cristina Serna (España, regidora de Podemos en Sant Boi); Repaji Milena (Serbia, presidenta del Partido de la Izquierda Radical); Ruiz Robles Manuel (España, excapitán de navío de la Armada); Traoré Diangou (Francia, LFI, activista de los barrios populares); Wright Ann (Estados Unidos, expdiplomática y excoronel del Ejército).

ORGANIZACIONES:

Bertrand Russell Peace Foundation (Gran Bretaña); Campaign for Nuclear Disarmament (Gran Bretaña); Codepink (Estados Unidos); Izquierda Roja (Dinamarca); La Paz desde Abajo (coalición ruso-ucraniana); Parti ouvrier indépendant (Francia); Stop the War (Gran Bretaña); Unión de la Izquierda postsoviética (Rusia-Ucrania-Kazajstán).

Importantes sindicatos de Gran Bretaña aprueban una resolución para el mitin de Londres

NEU, sindicato de docentes (500 000 afiliados)
PCS, sindicato de funcionarios públicos (200 000 afiliados)
RMT, sindicato de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (80 000 afiliados)

Y también estructuras sindicales locales como: Crewe & District Trades Council; Luton TUC; Unite LE/7055E Road Haulage & Logistics Branch; ASLEF Wes.t London Electric.

Texto de la resolución adoptada por los sindicatos británicos:

El sindicato señala:
1. El éxito de la conferencia de París, celebrada los días 4 y 5 de octubre de 2025, que reunió a 4 000 personas y

delegados de 18 países diferentes.
2. La implicación de los sindicatos franceses en la movilización y la financiación de la conferencia, así como la presencia de representantes sindicales de toda Europa en esta última.
3. La conferencia puso de relieve la oposición al aumento del gasto en armamento y al consiguiente deterioro del nivel de vida de los trabajadores que ello supone en toda Europa.
4. La conferencia amplió las voces del movimiento de solidaridad con Palestina.
5. La entusiasta acogida que la conferencia reservó al discurso de la secretaria general del PCS y de los representantes del movimiento Stop the War.
6. Los objetivos de la conferencia respaldan las posiciones adoptadas en la reunión anual del TUC a favor del prin-

cipio «salarios y no armas» y del apoyo al movimiento palestino.
7. Una segunda conferencia europea, anunciada en París, se celebrará en el Central Hall Westminster, en Londres, el 20 de junio de 2026.

El sindicato considera que...

1. Se trata de una iniciativa que se ajusta perfectamente a la resolución del TUC sobre el tema «salarios, no armas».
2. En un contexto internacional cada vez más sombrío y ante el auge de la extrema derecha en Europa, es necesario ampliar y profundizar los vínculos internacionales entre sindicalistas, movimientos pacifistas y fuerzas progresistas.
3. La conferencia de Londres, organizada bajo el lema «Los pueblos de Europa reclaman la paz» y las consig-

nas «Salarios, no armas» y «Protección social, no guerra», merece el apoyo de los sindicatos británicos.
El sindicato reafirma esta posición.
1. Para animar a nuestros miembros a participar en la conferencia. Para animar a las secciones y regiones a enviar delegados y hacer donaciones económicas para contribuir a la organización de la conferencia
2. Proponer ponentes de alto nivel entre los responsables sindicales para la conferencia.
3. Hacer una donación para cubrir los gastos de la conferencia.
4. Para contribuir a la producción y difusión del material preparatorio de la conferencia.
5. Dar a conocer y apoyar la conferencia dentro del movimiento sindical en general.



Campaña colectiva en defensa de los compañeros sancionados en Madrid

Desde Coorpenmadrid-COESPE hemos puesto en marcha una campaña política, social y jurídica para defender a dos compañeros del movimiento pensionista, Francisco Cepeda y Ángel García, miembros de Coorpenmadrid-COESPE, sancionados en aplicación de la llamada Ley Mordaza por el mero hecho de ejercer su derecho constitucional a la protesta.

Las sanciones impuestas no responden a ningún problema de orden público. Nuestras concentraciones frente al Congreso de los Diputados se vienen realizando desde hace años de forma pacífica, organizada y continuada, sin que jamás se haya producido alteración alguna.

Lo que se castiga no es un hecho, sino una posición política: exigir el cumplimiento de la Ley de la Auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social, aprobada en sede parlamentaria y sistemáticamente incumplida.

El escudo social no puede ser un eslogan ni una medida temporal, tiene que ser una medida que garantice el empleo estable, pensiones dignas y derechos sociales.

Ante esta situación, Coespe decidió no limitarse a recurrir las multas, sino lanzar una campaña colectiva con objetivo claro: paralizar y anular las sanciones impuestas a nuestros compañeros.

El eje central de la campaña es una carta dirigida personalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunciando la aplicación represiva de la Ley Mordaza y exigiendo medidas inmediatas. Está carta se está difundiendo para que sea remitida por el movimiento obrero, las organizaciones sociales, vecinales, y demo-



Concentración en Sol de CoorpenMadrid-COESPE, 21/01/2026

cráticas, con el objetivo expreso de que el ministro reciba cientos de escritos y no pueda mirar hacia otro lado.

Paralelamente, antes incluso de hacer pública la campaña, mantuvimos contactos con distintos parlamentarios, que compartieron la denuncia y registraron formalmente una pregunta dirigida al ministro del Interior, interesándose por la actuación policial, los criterios sancionadores y las medidas previstas para suspender o paralizar los

procedimientos abiertos contra nuestros compañeros.

Preguntas movilizaciones pensionistas, Fdo: Martina Velarde Gómez, diputada de Podemos, registra 184-Pregunta al Gobierno con respuesta escrita en Madrid, Congreso de los Diputados a 20 de enero de 2026.

A la Mesa del Congreso de los Diputados, Fdo: Jordi Salvador i Duch, diputado Esquerra Republicana, registra 184-Pregunta al Gobierno con res-

puesta escrita en Madrid a 18 de diciembre de 2025.

Otros grupos parlamentarios nos han trasladado además su disposición a llevar esta campaña a sus espacios,

Ni multas ni mordazas. Gobiernos que gobiernen, los derechos y las pensiones públicas se defienden.

ampliando su alcance político. Enrique Santiago, diputado de Sumar, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Exteriores en el Congreso, y el Grupo Parlamentario Socialista, en particular el Gabinete del Portavoz en el Congreso (GPS).

Nos envía una carta invitándonos a una reunión con el delegado del Gobierno en Madrid, por considerar que el diálogo es siempre la vía más adecuada para aclarar posiciones, y que este encuentro permitirá abordar, con la debida calma y detalle, todos los puntos que consideremos oportunos.

La campaña cuenta además con una base jurídica sólida. La comisión Legal Sol ha elaborado una nota en la que se señala que los hechos recogidos en la resolución sancionadora no se corresponden con la realidad, existiendo además parte métrica de lesiones de Francisco Cepeda y una denuncia penal interpuesta por una presunta agresión policial ocurrida en el mismo contexto.

Todo ello refuerza la exigencia de suspensión inmediata de las sanciones mientras se resuelven los recursos presentados.

Por eso esta campaña no termina en la denuncia. Es un llamamiento a la lucha contra la represión, de la que a día de hoy llevamos más de 100 cartas enviadas al señor ministro Fernando Grande-Marlaska.

Ni multas ni mordazas. Gobiernos que gobiernen, los derechos y las pensiones públicas se defienden.

CoorpenMadrid-COESPE
 Febrero de 2026



Campaña contra la Ley Mordaza, por la anulación de las sanciones

La llamada Ley Mordaza, con cientos de miles de sancionados en los diez años que lleva en vigor, supone un cuestionamiento de las libertades que impone un marco represivo propio del régimen de Franco.

Bajo su responsabilidad política se está aplicando la Ley Mordaza contra quienes ejercen derechos

Publicamos una relación, necesariamente incompleta, de las decenas de comunicados dirigidos al ministro del Interior que han llegado a nuestra redacción exigiendo la anulación de las sanciones a los militantes de CC. OO. y miembros de la COESPE Francisco Cepeda y Ángel García, iniciada e impulsada por esta última organización.

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Toledo de CC. OO. se ha dirigido en estos términos al ministro del Interior:

«Bajo su responsabilidad política se está aplicando la Ley Mordaza contra quienes ejercen derechos constitucionales.

Es una irresponsabilidad democrática mantener esta ley represiva que se utiliza para intimidar, sancionar y silenciar a quienes defienden derechos sociales básicos.

Desde la Federación de Jubilados y Pensionistas de CC. OO. de Toledo exigimos la retirada de las sanciones a los compañeros Francisco Javier Cepeda González, militante de CC. OO., y Ángel García.

Sanciones que no corresponden a ningún problema de orden público sino a una decisión política represiva».

Con contenidos similares se han dirigido también al ministro:

- El Sindicato de Sanidad de CC. OO. de Sevilla
- Más Madrid Compromiso con Getafe
- La Asociación Sociocultural AMAL del Alto Tiétar
- Izquierda Unida de Ávila
- Izquierda Socialista del PSOE de Castilla-La Mancha
- UPTA-UGT Euskadi

Al mismo tiempo, desde el País Valenciano, distintas organizaciones se están dirigiendo al ministro del Interior y a la delegada del Gobierno en Valencia, añadiendo a las de estos compañeros, la anulación de las decenas de sanciones que están llegando a militantes y activistas por ir a la huelga y manifestarse el pasado 29 de mayo por la dimisión de Mazón y por una reconstrucción social tras la dana.

Comité de redacción

Los pensionistas protestan en la sede del PP de Madrid



Concentración de pensionistas en Génova, 13

El pasado 30 de enero, más de 500 pensionistas nos manifestamos frente a la sede del PP, en la calle Génova 13 de Madrid.

Nada nuevo encontrarse con un fuerte cordón policial que no dejaba salir ni un milímetro del escaso perímetro concedido por la Delegación de Gobierno y donde se volvieron a producir empujones por parte de la Policía.

El movimiento pensionista convocó, para denunciar la posición de la derecha y ultraderecha del PP, VOX, JUNTS, UPN que, con sus 178 votos en contra, frente a 171 votos a favor, tumbó el pasado día 27 de enero en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 16/2025, que recogía la subida de las pensiones públicas para el 2026 y el mantenimiento del escudo básico de protección a los sectores de la población con más precariedad.

La revalorización de las pensiones

para 2026 se concentraba en un incremento del 2,7% para las pensiones con carácter general, entre un 7% y un 11,4% a las pensiones mínimas, siendo el 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

Estos incrementos ya se han aplicado en enero. Al no ser ratificado este RDL, quedan sin efecto a partir de febrero, de no presentarse y aprobarse ningún otro Real Decreto Ley que garantice este escudo básico social.

El Decreto, venía a dar cumplimiento a la revalorización de las pensiones con el incremento del IPC del año anterior según recogen las leyes 21/2021 y 3/2023 que, aunque insuficiente, es una de las reivindicaciones que los pensionistas y las pensionistas no dejamos de pedir sistemáticamente en las calles.

Lo ocurrido en el Congreso vuelve a demostrar que, para algunos partidos

políticos, las pensiones y los derechos básicos sociales no son un derecho fundamental, sino una moneda de cambio al servicio de su estrategia partidista, olvidando las conquistas de la clase trabajadora. No somos tontos y sabemos que juegan con la incertidumbre y la vida de millones de personas pensionistas y de los sectores más precarizados, utilizando el miedo y el bloqueo institucional como herramienta política.

Por ello, rechazamos frontalmente la posición y votación de los partidos de derechas. Estamos cansados de políticas de demagogia y falsedades, iniciando las movilizaciones ante el PP en Madrid y en otras ciudades, ante las sedes de los representantes de la derecha, gritando que no los queremos, que no queremos sus políticas negativas ante la revalorización de las pensiones públicas, y que no queremos su mode-

lo social, que no es otro que recortar, privatizar y abandonar todo lo público. Políticas que dan la espalda a la clase trabajadora, a la juventud, condenada a la precariedad, y a las personas pensionistas que hemos sostenido en parte este país durante décadas.

La prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para personas vulnerables, afecta a miles de pensionistas. El colectivo de pensionistas no vive exento de desahucios y subidas imposibles de alquileres.

La prohibición de cortes de suministros básicos: agua, luz y gas, también afecta a miles de pensionistas que no llegan a fin de mes. Su rechazo sistemático a medidas de protección social demuestra una vez más, que anteponen el mercado y los beneficios privados a los derechos de la mayoría social.

El escudo social no puede ser un eslogan ni una medida temporal, tiene que ser una medida que garantice el empleo estable, pensiones dignas y derechos sociales.

Cada voto en contra del refuerzo del sistema público de pensiones es un voto contra la clase trabajadora y contra la juventud.

Los recortes deben producirse en el alarmante aumento del gasto militar y el rearme, la economía debe sustentarse en derechos y vida.

Por todo ello, llamamos a la movilización y a seguir en las calles. Frente a una derecha que bloquea y niega derechos, la respuesta debe ser organización, unidad y lucha. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio ni un chantaje político.

Exigimos al Gobierno de coalición, y a las fuerzas que lo apoyan, que legislen sin dejarse chantajear por el poder fáctico y sus representantes políticos, y a las dirigencias sindicales, que abandonen su silencio y encabezen movilizaciones en defensa de la clase obrera y del futuro, sin rearmes y guerras.

A.P.

Sin plena derogación de la Ley de Extranjería no hay democracia

De nuevo una movilización, con más de 700.000 firmantes a través de una iniciativa legislativa popular, arrastra el voto de 310 a favor de una regularización de migrantes. Solo

Motivos de urgencia

El propio Gobierno reconoce y con datos: «No obstante, la mayoría ya trabaja, aunque muchos lo hacen hoy en

más de 500.000 migrantes en las regularizaciones realizadas en los años 2000 y 2001.

Seis años de lucha

Entonces ¿por qué han tardado tanto, desde la última realizada con el Gobierno de Zapatero y regularizando a más de 576.000 migrantes?

Debemos volver al manual, este Gobierno, como los anteriores ha tenido que ser forzado a la regularización de migrantes, y esta vez no solo por el trabajo incansable de movimientos como el de «Regularización Ya», uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes. Edith Espínola, una de las portavoces manifestaba «Celebramos porque es un trabajo de más de 6 años que ha puesto sobre la mesa del Gobierno la imperiosa necesidad de la regularización de las personas migrantes [...] desde hace tiempo la plataforma comenzó a instar al Gobierno a aprobar la ILP por decreto ante el bloqueo del Congreso de los Diputados».

Seis años en los que las personas migrantes han sufrido unos de sus periodos más críticos. «Ha sido un trabajo de presión, lectura, análisis y solicitud de cambios de medidas, hemos pensado en cada persona migrante en irregularidad administrativa». La criminalización del recién llegado,

Espínola ha afirmado que: «aunque nos hubiera gustado que la fecha hubiese sido hasta la publicación del BOE», consideran que «se ajusta bastante a toda la lucha realizada desde el 2020».

Montero alertaba de algunas de las dificultades, ya que tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.

A nadie se le puede escapar que exigir el padrón se vuelve irrazonable ante un mercado de la vivienda inviable para una persona migrante por lo que creen que el aporte de otras formas de pruebas ayudaría a facilitar la comprobación de residencia.

Desmontando los bulos

En cuanto a la percepción de ayudas

Los migrantes regularizados pueden ser beneficiarios de las prestaciones sociales igual que el resto de los trabajadores, siempre que se cumplan los requisitos de cada una de estas prestaciones.

Derecho a sanidad

La concesión de permiso laboral y de residencia implica además el acceso a la sanidad pública. La normativa sanitaria actual no reconoce plenamente a las personas migrantes en situación administrativa irregular como titulares del derecho a la asistencia sanitaria, aunque sí atiende en situaciones de urgencia. El permiso de residencia y laboral permite la obtención de una tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente.

Sin derecho a voto en generales o autonómicas

Uno de los bulos más extendido por Feijóo y Abascal que señalaba como motivo de esta regularización extraordinaria era para que Pedro Sánchez pueda obtener mejores resultados electorales. Solo se concede permiso para

las elecciones municipales. Así como los ciudadanos de aquellos países con los que España tenga convenio (Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay o Perú), que si podrán votar en determinadas elecciones municipales, aunque cumpliendo los requisitos que en cada caso se establezcan, que suelen ser de residencia habitual continuada en una horquilla de entre 3 y 5 años.

No otorga el derecho a nacionalidad automática

Eso sí, activa el reloj para empezar a contar los plazos para la nacionalización, que será de diez años en los casos generales, y que se reduce a dos años para los países de origen con convenio, como es el caso de muchos países de América Latina -Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Paraguay o Bolivia- y otros como Islandia, Noruega, Islandia, Reino Unido, Corea del Sur o Nueva Zelanda.

Además, será de un año para casados con españoles o viudos, además de nacidos en España o descendientes de hasta segundo grado de españoles.

Recaudación

Es de presumir que el Estado con el pago de las tasas impuestas llegaría a recaudar hasta 26 millones de euros.

Evitando mafias

Se ha ordenado que toda la tramitación de los expedientes pueda realizarse de forma telemática.

Suspende los procedimientos de retorno

La simple presentación de la solicitud de regularización suspenderá los procedimientos de retorno, y su mera admisión a trámite implicará automáticamente la autorización provisional para residir y trabajar, que se ratificará o se cancelará con la resolución definitiva de la solicitud. En caso de ser favorable, se concederá un permiso de un año para residir y trabajar, que después podrá prorrogarse.

De todas maneras, si bien se pueden celebrar estos pasos hacia adelante, lo que no se puede negar es que siguen y seguirán existiendo restricciones para los y para las migrantes, porque siguen siendo utilizados para la división entre los trabajadores. Cualquier persona que se manifieste democrática no puede sino exigir la igualdad que conlleva la derogación



Vox votó en contra.

Se tramitó de vía reglamentaria, según la Moncloa, por ser más rápida, más eficaz y más garantista, todo ello para dar una respuesta inmediata... sí, pero fue necesario, insisto, la movilización y recoger 700.000 firmas. «Ante la urgencia social y el amplio consenso político, económico y social de la medida, el Gobierno ha estudiado la vía reglamentaria para dar la oportunidad a personas que se encuentran en nuestro país de vivir con igualdad de derechos y deberes. No es una alternativa al Parlamento, es una respuesta del Gobierno dentro del marco constitucional y plenamente compatible con el debate legislativo». Sí, pero fue necesaria la movilización.

Los requisitos básicos:

- Cumplirse los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

- Acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025.

- En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

- Carecer de antecedentes penales.

El Reglamento de Extranjería

La medida es plenamente compatible y complementaria con el Reglamento de Extranjería.

Con relación a la posibilidad de contratación laboral

La autorización de residencia habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, eliminando trabas administrativas tanto para la persona trabajadora como para el empleador.

Vigencia inicial

La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería. De hecho, la población migrante en España supone una gran fuerza laboral para nuestro mercado de trabajo y economía.

condiciones de informalidad o precariedad administrativa. La regularización ordena situaciones laborales ya existentes, permitiendo que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica. Los datos avalan esta realidad. Desde la reforma laboral, hay 800.000 personas extranjeras afi-



liadas más a la Seguridad Social, y casi un millón más que antes de la pandemia. En 2025, España cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas, un máximo histórico, que representa ya el 14,1% del total de cotizantes». Y sigue ofreciendo datos al respecto: «En 2025, el 77% de las nuevas altas en el trabajo autónomo correspondieron a personas de origen extranjero. Los datos demuestran algo fundamental, y es que su aportación es estructural, no coyuntural. Sostiene el empleo, refuerza el sistema de pensiones y contribuyen a la prosperidad compartida. Esta regularización se hace para reconocer derechos, y desde ahí permitir una integración laboral plena, libre y digna. La medida permite regularizar la situación de miles de personas que ya forman parte de nuestras comunidades. Son vecinos y vecinas, y trabajadoras y trabajadores en sectores esenciales como el cuidado, la agricultura o la hostelería, que contribuyen diariamente a la vida económica y social de barrios y municipios».

Sin embargo, no es nada nuevo

Siendo Aznar presidente del Gobierno regularizó de forma extraordinaria a

de la recién llegada, la utilización sin datos, con bulos, aprovechando sin duda la bronca política, muy intensa por parte del PP, Vox y Alianza Catalana y en buena medida por Junts. Basta ver lo ocurrido en Badalona, con el desahucio masivo de más de 400 trabajadores y trabajadoras sin regularizar en algunos casos. El gobierno municipal de Albiols (PP) no solo exigió el desalojo sino que llegó a afirmar «no solo no puedo, sino que tampoco les quiero ayudar».

Tuvo que salir la propia Iglesia católica y la patronal a tratar de corregirlo, manifestando que era necesario regularizar a más migrantes, unos por humanidad y otros por necesidades económicas: «hace falta mano de obra».

Podemos

Si bien otros partidos estuvieron trabajando para ello como fue ERC, ha sido Podemos quien ha cerrado el acuerdo, un acuerdo que como manifestaba la eurodiputada Irene Montero el pasado lunes: «la medida implicará a las personas que estén residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025». Respecto a esta fecha, Edith



trabajar y residir. De esta forma, no pueden votar en elecciones generales ni autonómicas, como tampoco en los referendums que puedan convocarse. A excepción de los ciudadanos de la Unión Europea, que sí podrán ejercer su derecho al voto tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como en

de la Ley de Extranjería. Sin reconocimiento a los migrantes como ciudadanos de pleno derecho no hay democracia.

Eva Clara

REPUBLICANAS

Reunión pública en París Mujeres "contra la guerra"

El sábado 31 de enero, en París, una reunión pública titulada «Mujeres contra la guerra» llenó el local del POI por iniciativa de militantes y organizaciones que participaron en la reunión del pasado 5 de octubre contra la guerra en el Dôme de París.

En la sala, la mayoría de las participantes procedían de diferentes ámbitos: feministas, militantes descoloniales y antisionistas, sindicalistas, militantes políticas. Pero todas compartían una misma convicción: «No a la guerra. No a la militarización de la escuela, de la juventud y de los servicios públicos. Abajo la represión».

A menudo son las mujeres las que toman la iniciativa para bloquear la marcha hacia la guerra y a los Gobiernos belicistas. Varias ponentes lo han mencionado en sus intervenciones.

En su introducción, **Mélinda Sauger, profesora, sindicalista y militante del POI y LFI**, presentó la invitación a la manifestación contra la guerra que tendrá lugar en Londres el próximo 20 de junio e invitó a las militantes a suscribirse. Reproducimos a continuación extractos de algunas intervenciones.

Julie, por el Movimiento de Madres que crían solas (MMI)

«La supervivencia se ha convertido en una cuestión de gestión contable; el Estado ya no ve a nuestros hijos como ciudadanos a los que hay que educar, sino como un recurso que hay que movilizar o como delincuentes a los que hay que castigar. Para nosotras, el feminismo no consiste en romper techos de cristal. Consiste en asegurarnos de que el suelo bajo nuestros pies no

se derrumbe. Y hoy en día, ese suelo está minado por una lógica de guerra».

Sophie Duclos, docente y sindicalista en Hauts-de-Seine

«En la Educación Nacional, existe el dispositivo de clases de defensa y seguridad global. Actualmente hay 1200 clases abiertas en Francia y Macron quiere llevarlas a 2400. ¡Nosotros queremos que estas clases desaparezcan! Es como meter uniformes en las aulas, el ejército no es neutral. Somos un lugar de emancipación, no de reclutamiento. [...] Los dirigentes sindicales no están a la altura de la situación marcada por la economía de guerra, que sin embargo destruirá en primer

lugar a los sindicatos. Es escandaloso. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, a la base, luchar».

Caroline Rosenberg, colectivo judío descolonial Marad (Suiza)

«Denunciamos la esencialización racista de las personas judías, la instrumentalización del antisemitismo y las manipulaciones que permiten alianzas entre supremacistas y fascistas y justifican, en particular, el genocidio en Palestina. Rechazamos estas recuperaciones

de la guerra que se celebrará en Londres el 20 de junio de 2026».

Yessa Belkhdjia, cofundadora del colectivo de defensa de los jóvenes de Mantois

«Nosotras, las madres, nos negamos a ser sujetos políticos subordinados. Hemos politizado nuestro dolor. Hemos salido del lugar que nos asignaba el Capital, el trabajo reproductivo. Hemos transformado los traumas individuales en una lucha colectiva por la dignidad. (...) Nos resistimos a su violencia, a la militarización y a sus horribles dispositivos, como las



clases de defensa, el SNU, etc. Nosotras, mujeres proletarias, mujeres de barrios descendientes de inmigrantes, decimos no a la escuela de la guerra, a una sociedad de guerra, a todas las guerras, sean donde sean, aquí o en cualquier otro lugar».

Awa Ba, sindicalista: federación FO de Enseñanza (Fnec-FP FO)

«Mi federación participó en la reu-

nió del 5 de octubre de 2025 en el Dôme de París. Les comunico que mi federación, en su reunión de la semana pasada, acaba de decidir aceptar la invitación de las organizaciones obreras inglesas para participar en la reunión internacional contra la guerra que se celebrará en Londres el 20 de junio de 2026».

El PIB y la economía

El 3 de febrero, en Dubái, Pedro Sánchez se refería así a España: «Un país cuya economía creció un 2,8% en 2025, casi el doble de la media de la zona euro, cuyo PIB acaba de superar los 2 billones de dólares, que creó casi 600.000 puestos de trabajo el año pasado, aproximadamente la mitad de todos los nuevos empleos de la UE. Basta con abrir el *Financial Times* o *The Economist*, poner la CNN o Bloomberg, para oír hablar de la excelencia del modelo español». Parodiando a Aznar: «España va bien».

Pero el PIB no mide el deterioro de las infraestructuras, ni de la sanidad pública, o si para la mayoría de

la población es asequible o no una vivienda digna. PIB y renta son casi sinónimos; por tanto, hay que atender a cómo se distribuyen las rentas y la producción puede aumentar mucho, pero si la mayoría de la población sufre un deterioro creciente de sus condiciones de vida y de caer sus ingresos, no hay una política «progresista» detrás de las cifras de crecimiento.

Eso es lo que dice el Informe FOESSA (Cáritas) de 2025, en el que se afirma que mientras unas pocas personas concentran la riqueza, la gran mayoría sufren para llegar a fin de mes y muchas otras se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, y la tasa

de pobreza infantil es del 29%. Cuando Pedro Sánchez cita los indicadores macroeconómicos y se ufana del «crecimiento económico» y de las alabanzas de la prensa financiera internacional, trata de ocultar la realidad de la situación de la mayoría de los trabajadores, y elude decir que desde 2009 hasta 2024 los beneficios empresariales han subido (todas las fuentes consultadas lo confirman, sin que podamos aportar estimaciones precisas de cuánto han aumentado los beneficios empresariales). Un ejemplo de esto: los seis grandes bancos (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) han vuelto a anunciar be-

neficios récords en 2025, un total de 34.000 millones de euros, o que supone un aumento interanual del 7,02%, y han repartido miles de millones de dividendos entre los accionistas.

Sin embargo, el salario real ha caído un 2% en los últimos 15 años (FEDEA), y según el INE, en 2025 el 36,4% de la población no pudo afrontar gastos imprevistos, frente al 35,8% del año 2024. Si tan bien les va a unos y tan mal a otros, deberíamos preguntarnos para quién gobiernan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Abriremos el debate en estas páginas.

Cosme Ferrer

Gasto militar y necesidades sociales

El Gobierno presume de haber triplicado su gasto en Defensa. España dedica, según cifras oficiales, 34.000 millones anuales al gasto militar, 22.000 millones más que cuando Sánchez llegó al Gobierno. Pero según el Centro Delas de Estudios para la Paz, el gasto militar real de 2025 alcanza los 40.457 millones, casi el 2,5% del PIB.

El Gobierno ha hecho del gasto militar su prioridad. Pero ese ingente desvío de fondos supone dejar desatendidas necesidades urgentes de la población. Enumeraremos algunas.

Solo para compensar el desgaste por uso y envejecimiento de infraestructuras haría falta una inversión mínima anual cercana a los 11.700 millones de euros.

La dana de Valencia y los accidentes ferroviarios han puesto de manifiesto las consecuencias de esta carencia.

Para dar solución al problema de la vivienda, algunos estudios cifran en más de 800.000 la necesidad de nuevas viviendas asequibles y sociales, lo que requeriría un esfuerzo inversor de alrededor de 250.000 millones de euros en 10 años. Aun reduciendo esa cifra, contando con la expropiación de viviendas de especuladores y fondos buitres, haría falta una inversión de 10.000 millones al año.

En el terreno de la educación, las necesidades no cubiertas son importantes. Las universidades públicas viven una situación angustiosa de déficit. La financiación pública de las universi-

dades sigue lejos de llegar al objetivo del 1% del PIB, que el art. 55 de la LOSU establece como referencia para alcanzar la suficiencia financiera de las universidades públicas. En concreto, en el año 2020, el porcentaje del PIB dedicado a las universidades se situaba en el 0,77%. Lo que supone que faltan anualmente 3.680 millones.

Se calcula en 250.000 el número de alumnos que se quedan sin plaza en la FP pública. Un 28,4% de los matriculados tiene que ir a la FP privada para poder cursar sus estudios. Según informes de CCOO, se requieren aproximadamente 1.000 millones de euros para crear 300.000 plazas públicas presenciales.

Entre 2010 y 2025, la sanidad pública ha dejado de recibir 35.000 millones (cifra actualizada a la inflación de lo que ha dejado de recibir como consecuencia de los recortes). El deterioro del sistema sanitario es muy acusado, y haría falta un plan de choque de al menos 10.000 millones anuales para recuperar las inversiones, reducir las listas de espera y recuperar a los profesionales perdidos.

Se calcula un déficit de 50.000 plazas residenciales para cubrir la demanda actual de personas con gran dependencia. A finales de 2025, la lista de espera de servicios de atención a la dependencia ascendía a 284.020 personas, con un tiempo medio de tramita-

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arriazabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Àngel Tubau.

C/ DESEÑAÑO 12, 1ªA 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

ción de 349 días.

Se registra una media de 93 fallecimientos diarios de personas que estaban en lista de espera para recibir su ayuda. Harían falta 9.000 millones anuales para corregir esta situación. El Gobierno tiene que elegir: atender a estas necesidades de la población o priorizar la respuesta a las exigencias de Trump y mantener el desahogado gasto militar. Cualquier alternativa electoral tiene que responder igualmente a esta cuestión.

Preparamos el Mitin Internacional contra la política de guerra del 20 de junio en Londres en defensa de las necesidades y reivindicaciones sociales.

L.G



barriles diarios a la isla antes de la intervención de Estados Unidos. México entregaba en promedio 17.200 barriles al día que dejaron de llegar a mediados de enero. Otros proveedores de crudo son Rusia, que envió su último buque en octubre, y Argelia, que no ha vuelto a llevar un carguero desde febrero pasado, según la misma fuente. Ahora, según el New York Times, Cuba solo recibe tres mil barriles diarios.

Y necesita 100 mil barriles diarios, de los cuales aproximadamente la mitad se destina a la generación eléctrica y el resto al transporte y a la actividad industrial. Todo el mundo puede imaginar la catástrofe humanitaria que el imperialismo USA está organizando.

«Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir», declaró Trump a la prensa en la noche de los jueves.

63 años de bloqueo

El triunfo de la revolución en Cuba en 1959, cuyo desarrollo posterior supuso la expropiación de los grandes propietarios —muchos de ellos norteamericanos— y la destrucción de la dictadura de Batista y sus instituciones provocó, muy pronto, la intervención armada norteamericana. En abril de 1961, la CIA organizó una invasión en la Bahía de los Cochinos que fracasó por la movilización del pueblo cubano.

A partir de entonces, las diferentes administraciones norteamericanas impusieron y reforzaron un embargo comercial contra la isla que, por el papel preponderante de la economía norteamericana y por medio de sus acciones sobre terceros países, se convierte en un verdadero bloqueo.

Bloqueo que ha sido condenado por la inmensa mayoría de los miembros de la ONU, cuya Asamblea General lo ha rechazado hasta en treinta ocasiones (en 2024, con solo el voto en contra de Estados Unidos e Israel). La difícil situación económica de Cuba es producto, en buena medida, de este bloqueo que impide a la isla el comercio normal con todos los países. La defensa de Cuba frente a la agresión imperialista

El periódico mexicano La Jornada concluye su editorial del 30 de enero de la manera siguiente: «En la coyuntura actual, incluso aquellos Gobiernos que sienten animadversión por la forma de gobierno que se han dado los cubanos deberían ser conscientes de que la defensa de Cuba es, de hecho, la defensa de toda la humanidad frente a la arbitrariedad y el imperialismo descarnado que el trumpismo condensa en su lema 'paz por la fuerza'».

«Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir», declaró Trump



Bandera de Cuba en la alambrada

Ciertamente, todo Gobierno que defienda la democracia, es decir, el derecho de cada pueblo a decidir sobre su futuro sin imposiciones externas, debería boicotear la orden ejecutiva de Trump. Incluyendo al Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Como Hitler en 1938, el Gobierno de Trump interpreta cada debilidad como una invitación a nuevas acciones. Pero no tenemos la garantía de que ningún Gobierno defienda a Cuba frente al imperio. Como ninguno ha defendido de verdad a Venezuela.

Lo que sí tenemos claro es que para todas las organizaciones del movimiento obrero y para todas las que se digan defensoras de los derechos de los pueblos es una obligación actuar ahora en defensa del pueblo cubano.

A.T.
31 enero 2026

Después de Venezuela, ¿Cuba?

Acosado por la formidable movilización en Minnesota, Donald Trump busca de nuevo una acción «destacada» en política exterior.

Trump concluyó diciendo -según la agencia AP- que ya no se enviará más petróleo a Cuba y que el Gobierno cubano va a caer.

El jueves 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva (el equivalente a un decreto) en la que asegura: «Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza».

Este decreto anuncia que su Gobierno impondrá aranceles adicionales a todo producto de «cualquier país que directa o indirectamente ven-

da o proporcione petróleo a Cuba».

Trump ha ordenado que a partir de este día los secretarios de Comercio, Howard Lutnick y el de Estado, Marco Rubio (hijo de cubanos exiliados) supervisen si algún país entrega, por cualquier vía, petróleo a Cuba.

Recordemos que, tras la agresión militar contra Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Trump impuso a la presidenta «encargada», Delcy Rodríguez, el embargo a todo envío de petróleo a Cuba. Venezuela era hasta la fecha el principal proveedor de petróleo de la isla.

Este decreto, por tanto, tiene un objetivo: hacer presión sobre México para que cese los envíos de combustible (siendo el segundo proveedor hasta la fecha).

Trump concluyó diciendo - según la agencia AP -que ya no se enviará más petróleo a Cuba y que el Gobierno cubano va a caer. Por el momento, la

secretaría de Energía de México y la dirección de PEMEX (petróleos mexicanos) guardaron silencio al respecto, y aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que México es soberano y decide por sí solo con quien comercia, la agencia Reuters informa que México había suspendido los envíos de petróleo.

¿Al borde de la asfixia?

Cuba precisa del petróleo para el transporte y el funcionamiento de sus centrales termoeléctricas. Según datos oficiales del Gobierno cubano publicados en el diario Granma (periódico oficial) el país hoy en día solo puede satisfacer menos de la mitad de la demanda eléctrica por otros medios.

Estos mismos días, el periódico británico Financial Times afirmaba que Cuba cuenta con suministro de combustible para 15 o 20 días. Venezuela proporcionaba unos 46.500

TEL AVIV ¿Quién alimenta los crímenes y la inseguridad?



Manifestantes inundan las calles de Tel Aviv

Una semana después de la manifestación de Sakhnin, más de 80.000 palestinos del interior y miles de judíos israelíes se manifiestan en Tel Aviv contra la violencia de las bandas criminales y la complicidad de la Policía de Ben-Gvir y Netanyahu. 2025 fue el año más mortífero jamás registrado para los «ciudadanos» árabes, con más de 250 personas asesinadas, hasta el punto de que se llega a comparar la vida cotidiana con una ruleta rusa permanente en numerosas localidades. A instancias de la práctica totalidad de las organizaciones, asociaciones y partidos árabes del interior, a los que se sumaron varias asociaciones judías, los manifestantes corearon consignas contra la criminalidad en la sociedad palestina y la complicidad de la Policía israelí con las bandas criminales. La

manifestación, al igual que la de Sakhnin la semana anterior, convocada por el Alto Comité de Seguimiento de los Asuntos Árabes del Interior (estructura que agrupa a los partidos y asociaciones palestinos), fue organizada principalmente por comités de preparación constituidos al margen de las organizaciones tradicionales y compuestos principalmente por jóvenes. Fue precedida por una huelga general de varios días, con un índice de huelguistas sin precedentes, que paralizó los hospitales israelíes, donde los palestinos ocupan un lugar central, los comercios y numerosos sectores económicos. Las banderas palestinas estaban prohibidas por la Policía, con el fin de evitar cualquier acto de violencia policial y provocaciones, por lo que los organizadores habían dado la ins-

trucción de no acudir con ningún signo distintivo partidista. No había banderas de partidos, ni signos distintivos, sino banderas negras y carteles que condenaban la criminalidad alimentada por las autoridades israelíes que permiten el tráfico de armas y, al mismo tiempo, difunden estereotipos racistas que afirman que esta violencia está relacionada con una supuesta cultura árabe.

Decenas de autobuses procedentes de los pueblos de Galilea no pudieron llegar a la manifestación porque la Policía cerró las carreteras con el pretexto de «atacos». Así es como se afirman los signos de un proceso de recomposición de la confianza individual y colectiva, y de la capacidad para rever-

tir la situación frente a las bandas y quienes las apoyan.

Una activista judía con la que nos encontramos en la manifestación nos dice: «Solo así, mediante una lucha común, podemos esperar ver una salida...»

Más de 80.000 palestinos del interior y miles de judíos israelíes se

Qué placer escuchar el árabe por los altavoces en el espacio público del centro de Tel Aviv, la ciudad blanca».

Varios observadores definen este profundo movimiento como un movimiento por los derechos civiles, que

rechaza en bloque la explicación sionista sobre la violencia inherente a la sociedad palestina.

Para muchos militantes palestinos del interior, la cuestión central es ahora si esta irrupción masiva en Tel Aviv sigue siendo la expresión de una revuelta puntual o se convierte en el punto de partida de un proyecto político organizado, capaz de articular la lucha contra el crimen con una confrontación global con el Estado colonial y sus aparatos de seguridad, que desde hace años permiten que la criminalidad se propague e incluso se desarrolle.

La responsabilidad estructural del régimen sionista en la producción de la violencia criminal en la sociedad palestina ya no es necesario demostrarla. Para los palestinos de 1948, se generaliza en toda la sociedad la comprensión de que su seguridad cotidiana es inseparable de la justicia social y de la lucha contra el apartheid y el colonialismo.

Corresponsal

Última hora

La huelga de profesores continúa en Cisjordania en condiciones especialmente difíciles. La Autoridad Palestina ha detenido en varias ocasiones a líderes del movimiento, algunos de los cuales siguen en prisión, sus compañeras han sido despedidas y los servicios de seguridad han decidido bloquear sus cuentas bancarias. A raíz de esta medida, se ha decidido convocar un paro en todas las escuelas de Cisjordania a partir del jueves 5 de febrero.



Tel Aviv

Trump atrapado entre la resistencia y el asunto Epstein

La resistencia del pueblo estadounidense contra la policía de inmigración de Donald Trump, combinada con el caso Epstein, acentúa de manera inédita la crisis del sistema político estadounidense basado en el bipartidismo.

En las altas esferas, los exponentes de Epstein muestran cómo los demócratas, los republicanos y los magnates de la industria se han revolcado juntos en las sórdidas

«Fuera ICE! ¡No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros!»

aguas de las piscinas caribeñas de Epstein. En este contexto, las declaraciones de Obama y Clinton instando al Gobierno federal a cooperar con los Gobiernos de los Estados demócratas cobran todo su sentido:

la defensa de un sistema corrupto que está llegando al límite de sus tradiciones. Esto no impide

«Nadie es ilegal en una tierra robada. Que le den al ICE».

que, para deshacerse de los republicanos de Trump, los votantes de Texas acaben de elegir a un demócrata para el Senado de su Estado en un distrito controlado por los republicanos desde hace más de treinta años.

Abajo, las manifestaciones masivas de este fin de semana contra el ICE, en todo Estados Unidos, significan que la población no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Se producen cuando la elección de Mamdani, miembro de la DSA, demuestra que es posible salir de las alternancias pautadas

como un reloj entre demócratas y republicanos.

También se producen en un momento en el que se están llevando a cabo huelgas, a veces victoriosas, en diversas zonas.

Este movimiento se refracta en todos los estratos de la sociedad, como lo ilustran las declaraciones de numerosos ganadores de los premios Grammy, empezando por el puertorriqueño Bad Bunny, gran triunfador de la noche, que proclamó: «¡Fuera ICE! ¡No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros!» O la estrella estadounidense Billie Eilish que al recibir el Grammy a la mejor canción del año, declaró: «Nadie es ilegal en una tierra robada. Que le den al ICE».

Es un momento decisivo, en el que cada vez más activistas y una gran parte de la población se plan-

tean la posibilidad de actuar conjuntamente para deshacerse de Trump y de todo lo que él representa. Así, muchos militantes sindicales se plantean la posibilidad de una huelga general bajo la consigna «Ice out». La situación, que se acelera, trastoca todos los calendarios.

El movimiento hacia el «todos juntos» sacude a las direcciones sindicales: lo que se ha plasmado en la asistencia de los presidentes de tres de los sindicatos más grandes de Estados Unidos en el mitin de Minneapolis el 23 de enero.

Pero es en la base donde se expresa claramente esta voluntad, en los grupos que patrullan para proteger a los migrantes, en las acciones de los sindicatos en defensa de sus compañeros migrantes, de sus alumnos migrantes...

Devan Sohler



Zohran Mamdani

La huelga general de hoy es un desafío directo a la brutalidad del ICE. Rechazamos un sistema que aterroza y se atreve a pretender ser garante de la aplicación de la ley. Nuestro coraje inspira al mundo.

El poder está en manos del pueblo. Solidaridad con todos los huelguistas.

Publicación en X del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.



Rashida Taib

31 de enero: jornada nacional de manifestaciones, paros...

«Solidaridad con todas las personas que participan hoy en las huelgas, paros y manifestaciones para poner fin a la violencia perpetrada por el ICE contra nuestras comunidades. Debemos continuar nuestra movilización y desarrollar nuestro movimiento día tras día. Juntos, aboliremos el ICE y el CBP para proteger la vida, los derechos y la dignidad de todos».

Publicación de Rashida Taib, representante elegida por el distrito 13 de Michigan en la Cámara de Representantes



Robin Wonsley

Por primera vez en su historia, los Socialistas Demócratas de América (DSA) acceden a un cargo oficial de liderazgo en el Ayuntamiento de Minneapolis. La concejala Robin Wonsley fue elegida líder de la minoría en la reunión del consejo celebrada el lunes. En una declaración, Wonsley afirma:

«El socialismo democrático precociniza una estructura en la que la sociedad y la economía deben responder a las necesidades de los trabajadores, y no generar beneficios para los más ricos y las grandes empresas. Durante los últimos cuatro años, los socialistas democráticos han formado parte del consejo municipal y han trabajado con los habitantes para conseguir medidas importantes destinadas a mejorar la vida de los trabajadores. Estamos atravesando un período oscuro y sin precedentes, y ahora más que nunca necesitamos un liderazgo socialista democrático y movimientos sociales fuertes y organizados».

Nueva York – 21 días de huelga de enfermeros



Enfermeras en huelga recorren las calles de Nueva York

«El jueves 29 de enero, los miembros de la NYSNA organizarán una jornada de acción para exigir la exclusión de la ICE de los hospitales. Por la mañana, varios miembros del Congreso se unirán a las enfermeras y enfermeros en el piquete del hospital Monte Sinaí para continuar con sus llamamientos a mantener al ICE fuera de los hospitales y a proteger y cuidar de nuestras comunidades inmigrantes. A lo largo del día, las enfermeras y enfermeros de la NYSNA organizarán vigiliadas en diferentes piquetes. Por la noche, se unirán a la AFGÉ y a otros aliados sindicales en el VANY Harbor Healthcare Center para una vigilia en homenaje a Alex

Pretti (enfermero), en el marco de una semana de acciones en todo el país en su honor y en memoria de otras personas trágicamente asesinadas por el ICE.

Piquetes de huelga diarios

En el decimotercero día de la huelga más larga e importante de la historia de Nueva York, las enfermeras y enfermeros de la NYSNA siguen defendiendo a sus pacientes y exigiendo una atención sanitaria de calidad para todos los neoyorquinos, haciendo de la seguridad una prioridad en sus reivindicaciones. Los huelguistas seguirán reuniéndose en comités de negociación para trabajar en las propuestas. Los mediadores volve-

rán a convocar a las enfermeras, los enfermeros y las direcciones hospitalarias a la mesa de negociaciones a finales de esta semana. Las enfermeras y enfermeros continúan con los piquetes diarios con la esperanza de alcanzar acuerdos justos que protejan la seguridad del personal sanitario y de los pacientes.

La presidenta de la NYSNA, Nancy Hagans (enfermera de cuidados intensivos), declaró: «La presencia del ICE pone en peligro a nuestros pacientes y a nuestras enfermeras y enfermeros, así como a todas nuestras comunidades. Como enfermera inmigrante y líder de un sindicato cuyos miembros son en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, esta cuestión me afecta profundamente. Las enfermeras y enfermeros seguirán protegiendo a sus colegas y a la capacidad de sus pacientes inmigrantes para acceder a una atención sanitaria segura y de calidad, y para vivir con dignidad y sin miedo.» La semana pasada, agentes federales de inmigración de Minnesota mataron brutalmente al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, que había salvado la vida de varios veteranos. Al igual que las enfermeras y enfermeros de la NYSNA, luchó por proteger a sus pacientes y a su comunidad. Las enfermeras y enfermeros de la NYSNA honran su memoria y la de todas las demás víctimas de la violencia del ICE.

Jornada de acción contra la presencia del ICE

El miércoles 27 de enero, la presidenta de la comisión de trabajo del

Ayuntamiento, Shirley Aldebol, expresó su solidaridad uniéndose a las enfermeras y enfermeros en la línea de piquete. El martes 27 de enero, las enfermeras y enfermeros organizaron una jornada de acción en Monte Sinaí para protestar contra la presencia del ICE, en solidaridad con las comunidades inmigrantes. Los intemos y residentes del CIR/SEIU también se unieron a los huelguistas en los piquetes en Montefiore el lunes y en Monte Sinaí West el martes. Durante las dos últimas semanas de huelga, las enfermeras y enfermeros han organizado vigiliadas con familias y pacientes, han recibido a representantes electos y aliados —entre ellos el senador Bernie Sanders y el alcalde Zohran Mamdani—, han participado en acciones no violentas y han pronunciado discursos en los cuatro hospitales. [...]

Mientras los hospitales siguen exagando las reivindicaciones de las enfermeras y enfermeros y los costes para sus sistemas alegando condiciones económicas desfavorables, siguen obteniendo beneficios. Durante los tres primeros meses de 2025, el sistema sanitario Monte Sinaí registró más de 1200 millones de dólares de ingresos para el hospital Monte Sinaí del Upper East Side, lo que supone un aumento del 20% con respecto al mismo período del año anterior. Estas ganancias se obtuvieron al tiempo que se reservaba dinero en previsión de gastos de varios millones de dólares para enfermeras y enfermeros temporales. [...]



Nueva York

Me abono a
INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE MANUEL CUSO - LA CAIXA E593 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 €

12 NÚMEROS: 18 €

24 NÚMEROS: 36 €

PDF, 24 NÚMEROS: 15 €



www.informacionobrero.org